



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIII - N° 1285

Bogotá, D. C., lunes, 9 de septiembre de 2024

EDICIÓN DE 26 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariasenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 238 DE 2024 CÁMARA

por medio del cual se crea la Política de Austeridad Pública, se establece la obligatoriedad de los Planes de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y se definen lineamientos para promover y priorizar la transparencia del gasto público.

Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2024

Señor

Jaime Luis Lacouture Peñaloza

Secretario General

Cámara de Representantes

Ciudad

Asunto: Radicación de proyecto de ley "Por medio del cual se crea la Política de Austeridad Pública, se establece la obligatoriedad de los Planes de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y se definen lineamientos para promover y priorizar la transparencia del gasto público".

Respetado Sr. Secretario:

De conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley 5 de 1992, radico ante su despacho un Proyecto de Ley de mi autoría, con el objetivo de que pueda iniciar el trámite legislativo.

Cordialmente,

David Ráceros Mayarca
Representante a la Cámara por Bogotá
Coalición Pacto Histórico

PROYECTO DE LEY POLÍTICA DE AUSTERIDAD PÚBLICA

I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

Este proyecto de ley tiene por objeto crear la Política de Austeridad Pública y establecer la obligatoriedad de los Planes de Austeridad del Gasto que trata el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, para todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y definir lineamientos para promover y priorizar la transparencia respecto de los gastos de funcionamiento del Estado. El propósito global es elevar a política de Estado la permanente reducción de costos asociados a tiquetes, viáticos, realización de eventos, esquemas de seguridad, vehículos oficiales, publicidad, papelería, telefonía, suscripción a publicaciones, adquisición de regalos corporativos, condecoraciones, entre otros, y generar un mecanismo para que la ciudadanía pueda realizar periódicamente seguimiento a la destinación de recursos en el rubro correspondiente a gastos de funcionamiento del Estado.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley "Por medio del cual se crea la Política de Austeridad Pública, se establece la obligatoriedad de los Planes de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y se definen lineamientos para promover y priorizar la transparencia del gasto público" se estructura a partir de 37 artículos distribuidos en tres títulos, los cuales se presentan a continuación.

Disposiciones generales	ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación.
	ARTÍCULO 2. Principios.
	ARTÍCULO 3. Política de Austeridad Pública.
	ARTÍCULO 4. Planes Anuales de Austeridad del Gasto
Título I. Austeridad Pública como Política de Estado.	ARTÍCULO 5. Categorías de funcionamiento sobre las que recaen las medidas de austeridad.
	ARTÍCULO 6. Meta Nacional de Austeridad.
	ARTÍCULO 7. Reporte semestral.
	ARTÍCULO 8. Seguimiento y evaluación.
	ARTÍCULO 9. Salarios y remuneraciones.
	ARTÍCULO 10. Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sedes y adquisición de bienes muebles
Título II. Medidas de austeridad en los Planes Anuales de Austeridad del Gasto	ARTÍCULO 11. Prelación de encuentros virtuales para reuniones y encuentros de carácter organizacional
	ARTÍCULO 12. Suministro de Tiquetes
	ARTÍCULO 13. Fijación de la escala de viáticos.
	ARTÍCULO 14. Delegaciones oficiales

ARTÍCULO 15. Prohibición de pago de viáticos y delegaciones oficiales a particulares.
ARTÍCULO 16. Eventos.
ARTÍCULO 17. Esquemas de seguridad.
ARTÍCULO 18. Vehículos oficiales
ARTÍCULO 19. Ahorro en publicidad estatal.
ARTÍCULO 20. Papelería y telefonía.
ARTÍCULO 21. Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos.
ARTÍCULO 22. Prohibición de regalos, recordatorios y souvenirs a cargo del tesoro.
ARTÍCULO 23. Sostenibilidad ambiental.
ARTÍCULO 24. No pensiones para expresidentes
ARTÍCULO 25. Prohibición de duplicidad de estudios.
ARTÍCULO 26. Publicación de informes de comisión realizados por los servidores públicos.
ARTÍCULO 27. Plan de manejo y disposición de activos inútiles.
ARTÍCULO 28. No uso de personal pago por la entidad pública para fines personales
ARTÍCULO 29. Cajas menores.
ARTÍCULO 30. Fondos y fideicomisos
ARTÍCULO 31. Sistema de información sobre Fondos y Fideicomisos.
ARTÍCULO 32. Programa Global de revisión de programas de gastos.
ARTÍCULO 33. Reportes de empresas privadas que reciban recursos públicos
ARTÍCULO 34. Destinación del ahorro producto de la Política de Austeridad Pública.
ARTÍCULO 35. Gastos acordos a gasto fiscal de mediano plazo.
ARTÍCULO 36. Vigilancia y control
ARTÍCULO 37. Vigencia.

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia del COVID-19 empeoró la realidad económica colombiana, especialmente en la vigencia 2020. El desempleo pasó de un promedio de 10 % en 2019 a cifras históricas de 22 % en mayo de 2020 (DANE, 2024), y, por su parte, la pobreza monetaria creció en 6,8

puntos porcentuales (pp) entre 2019 y 2020, llegando a un 42,5% (DANE, 2022). Para 2020, alrededor de 21 millones de colombianos (as) se situaron en condición de pobreza, de ellos 7,4 millones de colombianos (as) experimentaron la pobreza monetaria extrema (DANE, 2022).

Ante esta situación, y amparados en las posibilidades normativas derivadas de la declaratoria de emergencia, los gobiernos nacionales y locales pusieron en marcha diferentes programas sociales de enfoque eminentemente asistencialista, que, si bien lograron paliar síntomas precisos de la crisis, demostraron su insuficiencia estructural al no llegar a convertirse en políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Sumado a lo anterior, el ingreso tributario cayó en el país, con lo que la herramienta de financiación usada fue el endeudamiento público. Por su parte, la deuda neta del Gobierno Nacional Central pasó de 48,4 % en 2019 a 60,7 % en 2020 y a 60,1 % en 2021 (MinHacienda, 2024b). De forma detallada tanto del nivel nacional como territorial, la deuda interna del Sector Público No Financiero (SPNF) en 2021 ascendió \$393.412 mil millones de pesos representando el 33 % del PIB y la deuda externa del SPNF a \$384.005 miles de millones de pesos representando 32,2% del PIB (Ver cuadro 1) (BanRep, 2024).

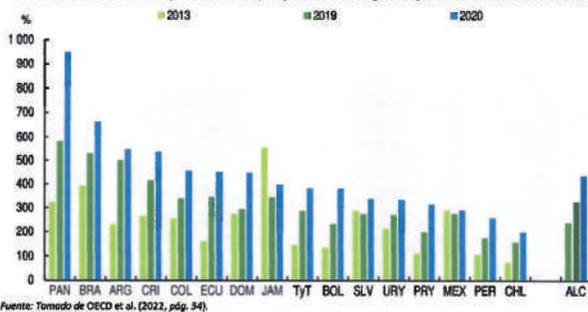
Cuadro 1. Deuda neta del Sector Público No Financiero (SPNF)

	INTERNA			EXTERNA			TOTAL		
	(Miles de Millones de Pesos)			(Porcentaje del PIB)*			(Participación)		
dic-08	32.857	63.831	148.489	17,2	13,3	30,5	56,4	43,6	100,0
dic-09	36.785	71.259	170.624	19,0	14,2	33,8	57,9	42,1	100,0
dic-10	115.821	71.479	187.300	21,3	13,1	34,4	61,8	38,2	100,0
dic-11	125.810	78.536	204.346	20,3	12,7	33,0	61,6	38,4	100,0
dic-12	130.045	77.955	208.000	19,6	11,7	31,3	62,5	37,5	100,0
dic-13	150.448	95.598	246.046	21,2	15,5	36,7	61,1	38,9	100,0
dic-14	173.703	135.981	309.684	22,7	17,8	40,5	56,0	44,0	100,0
dic-15	180.724	201.957	382.681	22,5	25,1	47,6	47,2	52,8	100,0
dic-16	212.534	204.762	417.296	24,6	23,7	48,3	50,9	49,1	100,0
dic-17	241.884	204.787	446.671	26,2	22,2	48,5	54,3	45,7	100,0
dic-18	267.639	225.328	492.967	27,1	22,8	49,9	54,1	45,9	100,0
dic-19	298.387	231.753	530.140	28,1	21,9	50,0	56,3	43,7	100,0
dic-20	348.341	296.637	644.978	34,9	29,7	64,6	54,0	46,0	100,0
dic-21	383.432	384.605	768.037	33,0	32,1	65,1	59,6	40,4	100,0
dic-22	455.599	473.632	929.231	31,0	32,2	63,2	49,0	51,0	100,0

Fuente: BanRep (2024). Boletín N° 90. Estadísticas sobre deuda pública. Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica Departamento Técnico y de Información Económica-DTIE - Sección sector público.

Evaluando la relación deuda pública respecto de los impuestos en ALC, la OCDE, la Comisión Europea y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF- (2022), en Colombia pasó de 338 % en 2019 a 456 % en 2020, relaciones por encima de las de ALC la cual pasó de 325 % en 2019 a 433 % en 2020 (Ver gráfica 1). Aquí se detalla la relevancia tanto de incrementar los ingresos tributarios del país partiendo de cumplir los principios de equidad y progresividad, así como de establecer un mecanismo de reducción del endeudamiento causado para la atención de la pandemia del Covid-19.

Gráfica 1. Ratio deuda pública bruta/impuestos en algunos países de América Latina



Fuente: Tomado de OECD et al. (2022, pág. 34).

Los países de América Latina y el Caribe -ALC- alcanzaron, conjuntamente, un máximo histórico de 13,6 % del PIB en 2020 a nivel de las Administraciones Centrales en el gasto público, un aumento de 2,3 pp en comparación con 2019. Entre los países con mayor incremento está Brasil y El Salvador con un crecimiento de 5,3 pp del PIB, y por su parte menores incrementos los presentaron Argentina, Barbados y República Dominicana con incrementos entre 4,6 pp y 4,2 pp del PIB (OECD et al., 2022, pág. 54). La respuesta de Colombia constituyó un incremento de 4,6 % del PIB de 2019 a 2020 (OECD, 2022, pág. 32).

Ante el adverso escenario socioeconómico anteriormente descrito, y los evidentes rezagos de la crisis que se evidenciaron con posterioridad a la pandemia, el Gobierno Nacional emprendió la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, bajo la guía de principios como la progresividad y la equidad. En esta lógica, el Gobierno Nacional en 2021 intentó, sin éxito, llevar a cabo una reforma tributaria enfocada en la modificación del cálculo al impuesto de renta y el gravamen de algunos productos básicos. Tras el cambio de Gobierno en agosto de 2022, se llevó a cabo el proceso legislativo que dio como resultado la reforma tributaria contenida en la Ley 2277 de 2022, cuyo énfasis impositivo estuvo enfocado en el gravamen de dividendos y las tasas de tributación de personas naturales con ingresos de mayor capacidad adquisitiva, así como acciones en línea de la lucha contra la elusión, evasión y acciones de política pública en función de la salud pública y medio ambiente.

Sin embargo, tras la experiencia global del confinamiento, el desarrollo de nuevos esquemas laborales, marcados por la apropiación productiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la forzosa generalización del teletrabajo, generaron una nueva conciencia pública en relación a diversos gastos administrativos de funcionamiento que se venían asumiendo como invariables pero que, a la luz de la coyuntura, se demostraron completamente prescindibles. Se hizo patente, entonces, que un elemento sustancial de la consecución de nuevos fondos también se encuentra en el redireccionamiento de los gastos innecesarios en los que incurre el Estado, especialmente cuando muchos de estos constituyen privilegios injustificables que reciben algunos (as) de sus servidores (as) y empleados (as).

Como lo señala el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana "el Presupuesto General de la Nación tiene una estructura relativamente constante. Año tras año, cerca del 60 % del presupuesto se destina a gastos de funcionamiento, el 20 % al pago de la deuda nacional y el porcentaje restante a inversión" (Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, 2023, p. 14). Esto sugiere la necesidad de revisar con detenimiento los recursos que están siendo destinados a este primer rubro, con la intención de eliminar aquellos gastos injustificados o que no tienen incidencia alguna para el correcto funcionamiento de las entidades públicas y el desarrollo de la función pública en concreto.

Las consecuciones de nuevos fondos se deben establecer en el marco de la eficiencia y eficacia en la planeación y ejecución del presupuesto público, sin que esto signifique el recorte a las políticas sociales encaminadas en la reducción de la pobreza y la desigualdad. La política de Austeridad Pública, entonces, debe enmarcarse en un criterio de "social", que significa prudencia en términos fiscales y que no tenga implicaciones negativas en lo social y económico de las poblaciones populares y empobrecidas. El presidente Gustavo Petro lideró en el año 2022 una reforma tributaria que demostró que se pueden hacer reformas tributarias no sólo con el objetivo de incrementar recaudo, también con objetivos sociales como la reducción de la desigualdad, y con ello, parte de los focos de acción fue la eliminación de privilegios que tiene unos pocos en la sociedad.

De esta forma, el presente proyecto de ley plantea la creación de una Política de Austeridad Pública como forma complementaria a políticas de orden tributario enfocadas en la eliminación de privilegios y el ordenamiento de las finanzas públicas desde los principios de justicia y equidad. No sólo se trata de ampliar la base fiscal del país para el cumplimiento de los mandatos constitucionales, también se debe hacer un ejercicio de eficiencia y eficacia en la planeación y ejecución de los recursos públicos, y esto significa, la creación y consolidación de una cultura de austeridad.

Referentes internacionales

La necesidad de avanzar en relación con la eficiencia administrativa y con la austeridad del gasto público desde una perspectiva social y no neoliberal, es decir, sin realizar recortes en las políticas sociales tiene un importante referente: México durante el gobierno del presidente López Obrador.

El gobierno de la “cuarta transformación” en México, en aras de priorizar el gasto social como instrumento de lucha contra la pobreza, sin recurrir al endeudamiento público, prioriza una política de Austeridad Republicana que buscó reducir costos del gobierno a través de recortes presupuestales, implementados a partir de tres leyes: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, La Ley de Austeridad Republicana y el cambio en la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta política estableció los lineamientos de ordenación del gasto público ajustado a las necesidades reales de ejecución del presupuesto nacional y la eliminación progresiva de los privilegios personales a funcionarios públicos a cargo del erario. Algunas de las prácticas de austeridad adoptadas en dicho decreto, han sido fuente comparativa del presente documento.

Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica -CELAG- analizaron los resultados de la Política de Austeridad Republicana encontrando que han ahorrado alrededor de 200 mil millones de pesos (mexicanos) del erario público, es decir, un 3,2 % del Presupuestos de Egresos de la Federación -PEF- del 2018 (en valores constantes). A modo de detalle, este ahorro se agrupa en 9 tipos de gasto: “el 30 % del ahorro se concentra en gastos asociados a uso de combustibles, 24 % beneficios laborales extraordinarios altamente concentrados en los funcionarios de alto rango (ej. aguinaldos, pagas extras, etc.) y un 14 % del ahorro proviene de menos contratación de servicios que no afectan al funcionamiento eficiente de la administración pública. También se ha identificado que el 9 % del ahorro se dio en gastos administrativos, por exceso de burocracia” (Ver gráfica 2). (Oliva & Serrano, 2023)

Entre las acciones de austeridad que ocurrieron en México, se encuentran:

- 53 % menos en viáticos a servidores públicos por funciones oficiales.
- 100 % en algunos tipos de dietas.
- 60 % en servicios integrales en el extranjero para servidores públicos por funciones oficiales.
- 50 % en pasajes aéreos.
- 88 % en vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.
- 84 % de reducción en congresos y convenciones.
- 55 % en servicios de telefonía celular.
- 76 % en la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

servidores públicos de alto nivel y el común de la sociedad. Por ejemplo, los (as) congresistas, magistrados y magistradas de Altas Cortes y, en general, directivos de entidades y empresas del Estado, reciben, además de sus salarios, gastos de representación, teléfonos celulares con cargo a las entidades, pólizas de salud, viáticos - la mayoría de ocasiones con montos muy superiores al costo de vida de los lugares en los que adelantan sus actividades en terreno-, y vehículos para su movilidad, entre otros.

En este punto, resulta relevante detenerse a revisar si estas prerrogativas son necesarias para el adecuado funcionamiento de las entidades públicas o si, por el contrario, únicamente se traducen en beneficios suntuarios concretos para quienes, de por sí, ya devengan entre 20 y 40 veces más que un colombiano promedio.

Según Decreto 0550 de 2024 del Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP-, en cumplimiento del artículo 187 de la Constitución Política de Colombia, realizó un aumento del 10,88 % en los salarios mensuales de los congresistas pasando a recibir \$48'142.046 mensuales en el año 2024, mientras que el salario mínimo mensual para 2024 se ubica en \$1.300.000 más el subsidio de transporte de \$162.000 (aunque para el empleador puede estar alrededor de \$1'989.000 por las contribuciones parafiscales). Es decir, un congresista en Colombia devenga más de 24 veces lo que un trabajador (a) formal de ingreso laboral correspondiente a un (1) salario mínimo. Sin embargo, la realidad colombiana es que existe un importante grupo de la población que recibe ingresos por debajo del salario mínimo mensual, ya sea por encontrarse en la informalidad o en actividades de la economía popular. Según el DANE (2022), a septiembre de 2021 el 46 % de la población ocupada tiene ingresos por debajo del salario mínimo (Ver cuadro 2), por lo cual la brecha entre los ingresos de esta población y los congresistas es mucho más amplia. Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Pontificia Javeriana a partir de sus informes ha planteado que, con este aumento, aunque está consagrado en la constitución, representa que para el 2024 “los Congresistas ganan más que 99,4 % de los hogares colombianos” (Méndez, 2024).

- 36 % de reducción del gasto en información en medios masivos derivada de operaciones de las instituciones.

Gráfica 2. Resultados en 4 años de la Política de Austeridad Republicana en México



Fuente: Tomado de Oliva & Serrano (2023).

Entre otros referentes, en Suecia los diputados del Parlamento no cuentan con ayudas o beneficios económicos, como la contratación de asesores particulares o la cobertura de sus gastos médicos. Además, la mayoría de los altos funcionarios públicos no tienen dotación de vehículos oficiales para su transporte, no obstante, cuentan con un subsidio para el uso del transporte público.

Desigualdad en ingresos en Colombia y privilegios personales a funcionarios públicos a cargo del erario.

Los anteriores ejemplos contrastan con la situación de Colombia, en donde los (as) servidores (as) públicos del nivel directivo en las tres ramas del poder público, gozan de prerrogativas en las que el país destina importantes recursos y que, lejos de redundar en un mejor funcionamiento de las entidades de las que éstos hacen parte, minan la confianza ciudadana y generan brechas artificiales internas entre los servidores y servidoras de mayor y menor jerarquía dentro de las entidades públicas, así como brechas externas entre los

Cuadro 2. Distribución porcentual de los ocupados por dominio geográfico según rangos de ingresos por ganancias y salarios laborales Enero - septiembre (2019-2021)

Población asalarada e independiente en 2021 (en miles de personas)	Periodo			Variación (p.p.)	
	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2019	2021-2020	2021-2019
20.168					
Total	100,0	100,0	100,0		
Hasta 0,9 smmv	46,1	46,5	41,8	-0,4	4,3
Más de 0,9 hasta 1,1 smmv	19,1	21,6	23,9	-3,5	-5,8
Más de 1,1 hasta 2 smmv	19,6	16,8	19,0	2,8	0,6
Más de 2 smmv	10,4	11,0	12,1	-0,6	-1,7
No sabe / no informa	5,8	4,1	3,2	1,7	2,6

Fuente: Tomado de DANE (2022).

Así mismo, se han presentado denuncias de la ciudadanía y de los medios de comunicación que altos funcionarios del Estado utilizan su cargo para designar a trabajadores de la entidad gubernamental para beneficio propio o individual, por fuera de las responsabilidades o funciones por la que fue contratado. En septiembre de 2022, por ejemplo, fue evidenciado en medios de comunicación nacional que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación fueron asignados a desplazar a las mascotas (perros) del Jefe de la entidad en los carros oficiales, y además a pasear o acompañaban a los animales para hacer las necesidades fisiológicas durante la jornada laboral (Akerman, 2022). Así mismo, Silvia Charry, periodista de la Revista Cambio, reveló cómo el entonces Fiscal General tenía como empleadas del servicio doméstico a funcionarias de una empresa contratista de la Fiscalía (Charry, 2022).

Lineamientos para promover y priorizar la transparencia del gasto público

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen una obligación dentro de la gestión pública (Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional). En términos del presupuesto y el ahorro en el gasto público, Colombia cuenta con el Portal de Transparencia Económica¹, sin embargo, el lenguaje y los puntos de acceso no son de carácter comprensible, interactivo y periódico que permita realizar seguimiento de manera detallada y desagregada a los rubros del presupuesto nacional destinados a cubrir gastos de funcionamiento, es decir, aquellos gastos necesarios para el

¹ Disponible en <https://www.pte.gov.co/index>

normal ejercicio de las funciones de las entidades, de los que hacen parte servicios personales², gastos generales³ y transferencias⁴.

Es decir, el país cuenta con un portal de información económica que no recolecta la información de ejecución presupuestaria ni de ahorro del gasto público de cada una de las entidades ni del agregado nacional, de forma clara, agrupada y a la vez que permita el detalle de la información de forma desagregada, según el interés de los grupos sociales o sociedad civil veedora. La falta de acceso de una forma sencilla a este tipo de información, proveniente de las fuentes oficiales, no solo profundiza en la transparencia, sino que permite hacer frente a la desinformación, o fake news, que diariamente circula en la opinión pública.

En el marco de las posiciones teóricas alrededor de la transparencia presupuestal, por un lado, hay posturas de su relevancia para las decisiones macro o de la alta gerencia pública, y por el otro, de la relevancia para la ciudadanía con miras a hacer control, incidencia de modificación y evaluación de los impactos (Bautista & Sepúlveda Reyes, 2017, pág. 42). Para cumplir con el criterio mismo de la transparencia presupuestaria como "la divulgación completa de la información fiscal relevante de manera oportuna y sistemática" (OECD, 2014), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo -OCDE y en inglés OECD- postula tres dimensiones: los tipos de reportes, el contenido de los mismos, y, las prácticas que se desarrollan para integrar con calidad e integridad los diferentes tipos de reportes (OECD, 2010).

En el marco de los postulados anteriores, prima que la información del ahorro del gasto público o cumplimiento de la meta de austeridad fijado sea de seguimiento y control por parte de la ciudadanía, quienes en su ejercicio político exigen respuestas en la gestión del ejecutivo. En materia de la integralidad de los diferentes reportes, tanto de ejecución

² Los servicios personales son aquellos trabajos ejecutados por el personal de nómina, contratos, etc., y están integrados por los conceptos de sueldo, personal de nómina, bonificación por servicios prestados, jornales, horas extras, dominicales y festivos, recargo por trabajo nocturno, auxilio de transporte, prima técnica, de servicios, de vacaciones, supernumerarios, viáticos, honorarios, servicios técnicos y subsidio familiar. [https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/CONCEPTO%20JURIDICO-%20Radocado%2044169%20de%202002.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/CONCEPTO%20JURIDICO-%20Radicado%2044169%20de%202002.pdf)

³ Los gastos generales son los causados por concepto de adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la administración y hacen parte de estos conceptos, entre otros, compra de equipo, materiales y suministros, mantenimiento, arrendamientos, impresos y publicaciones, servicios de comunicación y transporte, etc. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/CONCEPTO%20JURIDICO-%20Radocado%2044169%20de%202002.pdf

⁴ Las transferencias, son todos los egresos de presupuesto general a favor de personas naturales, jurídicas o instituciones con fines específicos. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/CONCEPTO%20JURIDICO-%20Radocado%2044169%20de%202002.pdf

presupuestal como de ahorro del gasto público, sea integrado en un sólo instrumento o mecanismo de rendición de cuentas periódico y sistemático.

En el marco del presente proyecto de ley, se establece que el informe de ejecución presupuestal que reporta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público trimestralmente tenga incluido, como un ítem adicional, el ahorro a la fecha en materia del cumplimiento del artículo 19 de la Ley 2155 del 2021, el Decreto de Plan de Austeridad anual vigente y de la implementación del presente proyecto cuando sea sancionado como Ley de la República. Así mismo, de forma complementaria al reporte de las entidades públicas, el proyecto de ley enmarca que las entidades privadas o mixtas que reciban recursos del Presupuesto General de la Nación deberán hacer públicos sus reportes financieros en los tiempos adecuados y definidos en la ley en materia de hacer seguimiento y veeduría ciudadana, desde el Congreso de la República y desde los respectivos entes de control.

Un plan robusto de austeridad o ahorro del gasto público en las categorías posibles de ahorro implica plantear una meta de cumplimiento que permita abrir paso, de forma robusta, a direccionar dicho ahorro en gasto social o inversión, con el fin de cumplir los objetivos macroeconómicos de reducción de la desigualdad y de acelerar el crecimiento económico. La meta anual de ahorro o austeridad del Gobierno Nacional deberá ir incrementando de forma progresiva, resultado de las acciones de eficiencia y eficacia en la implementación de medidas planteadas en el presente proyecto de ley.

En el marco del debate de la Ley 2155 de 2019, en su momento Proyecto de Ley 027/2021C -046/2020S, las medidas de austeridad representan las siguientes proyecciones de ahorro:

Cuadro 3. Proyecciones de ahorro Exposición de Motivos Ley 2155 de 2021

Rubro	Impacto
Gastos de personal	"Con esta medida, se generarán ahorros crecientes, que ascenderán en promedio para el periodo 2022-2032 a 0,1% del PIB, equivalente a \$1,4 billones de pesos a precios de 2022"
Adquisición de bienes y servicios	"(...) se generaría un promedio anual de \$85 mil millones a precios de 2022, en promedio para el periodo 2022-2032".
Congelamiento de las transferencias	"Por medio de estas disposiciones se generarán ahorros de \$339 mil millones en promedio por año, a precios de 2022, en el periodo 2022-2032".

Disminución del valor de contratos de prestación de servicios	"se proyecta que se generarán ahorros anuales que ascienden a \$127 mil millones en promedio, a precios de 2022, para el periodo 2022-2032".
Total	\$1,95 billones de pesos, a precios de 2022.

Fuente: Cálculos propios con información de (Cámara de Representantes, n.d.)

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca generar un marco que permita disminuir los recursos destinados a gastos de funcionamiento del Estado, a través de la identificación y regulación de aquellas cuya necesidad no es manifiesta respecto de la labor misional que realizan las entidades, de manera tal que se posibilite reorientar los mismos a la línea de inversión. Como correlato obvio, la iniciativa pretende que la austeridad sea elevada a principio rector que guíe el desarrollo de la gestión pública en Colombia.

El Estado colombiano, en el momento más álgido de la pandemia por el COVID -19, implementó un plan de ahorro que arrojó un ahorro de \$1,9 billones de pesos en el año 2020 (Cuadro 4), según informó en su momento el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante respuesta de Derecho de Petición en 2021.

Cuadro 4. Ahorro del gasto público producto del decreto de austeridad en el año 2020.

Concepto	Dinero ahorrado en 2020
Bienes Muebles Específicos	\$ 192.766.414.345
Comisión de estudios al Exterior	\$ 2.314.546.182
Comisión de Servicios al Exterior	\$ 22.912.902.016
Condicionaciones	\$ 5.217.720.124
Consumo de Energía	\$ 364.232.831.855
Eventos Operadores Logísticos	\$ 90.026.459.439
Horas Extras	\$ 64.813.783.424
Indemnización por vacaciones	\$ 47.366.383.358
Papelaría, útiles de escritorio y Oficina	\$ 210.998.817.671
Servicios de Investigación y Seguridad	\$ 814.281.563
Servicios de Publicidad y/o Espacios publicitarios	\$ 25.139.161.897
Sostenibilidad Ambiental	\$ 152.007.889.132
Suscripción a Periódicos y Revistas	\$ 33.121.163.732
Telefonía	\$ 184.735.441.223
Tiquetes	\$ 213.248.566.934
Vehículos	\$ 87.468.527.405
Viáticos	\$ 241.545.261.556
Total	\$ 1.938.899.351.336

Fuente: Respuesta derecho de petición Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2021)

Por su parte, para el año 2023 según el reporte "Comparativo de datos de austeridad del gasto por unidad ejecutora y categoría" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se

reportó un ahorro de \$39,2 mil millones de pesos, teniendo presente que es un dato que no reúne el 100 % de entidades, según informa el mismo Ministerio (Cuadro 5). Ante esta situación, resulta preocupante la reducción del cumplimiento en materia de austeridad que se reflejó después de superada la pandemia del COVID-19.

Cuadro 5. Ahorro del gasto público producto del decreto de austeridad en el año 2023

CATEGORÍA AUSTERIDAD GASTO	Año 2022	Año 2023	Dato Variación
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 2.424.390.517.822	\$ 3.139.409.706.056	\$ 774.029.249.034
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	\$ 4.218.818.888.378	\$ 4.509.809.244.798	\$ 331.010.406.420
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 1.404.066.460.865	\$ 1.706.229.838.622	\$ 342.157.152.776
VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 115.914.414.226	\$ 339.364.497.985	\$ 223.450.083.488
CONSUMO DE ENERGÍA	\$ 358.768.643.387	\$ 684.070.249.252	\$ 325.301.201.860
PAPELERÍA Y TELEFONÍA	\$ 742.212.959.315	\$ 800.396.362.256	\$ 118.183.396.941
SUMINISTRO DE TQUETES	\$ 445.856.892.480	\$ 553.632.135.796	\$ 107.775.243.316
CONSUMO DE AGUA	\$ 294.349.786.875	\$ 272.481.529.194	\$ 79.266.542.370
RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS	\$ 485.918.805.973	\$ 548.520.054.165	\$ 18.247.008.369
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 675.561.622.726	\$ 729.879.130.744	\$ 54.317.508.018
HORAS EXTRAS Y VACACIONES	\$ 295.440.516.478	\$ 310.124.280.519	\$ 18.689.744.041
CONDICIONACIONES	\$ 2.148.295.494	\$ 2.500.038.377	\$ 3.882.260.549
AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL	\$ 15.247.124.297	\$ 40.135.404.059	\$ 24.888.279.762
RESALDOS CORPORATIVOS	\$ 1.549.200.549	\$ 1.462.870.708	\$ 180.331.850
ESQUEMAS DE ESTEREO TIPO	\$ 140.097.443.413	\$ 145.956.372.216	\$ 2.241.071.029
COMISIONES DE SEGURO Y SERVICIOS	\$ 432.644.843.459	\$ 34.486.533.014	\$ 4.077.818.431
EVENTOS	\$ 704.285.885.400	\$ 682.033.123.415	\$ 12.051.171.987
SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS	\$ 33.090.811.613	\$ 34.202.345.463	\$ 3.887.685.750
TOTAL	\$ 12.784.908.998.519	\$ 15.142.126.564.414	\$ 2.425.194.736.295

Fuente: Elaboración propia con base en MinHacienda (2024a).

Nota: El informe presentado por MinHacienda está sujeto al reporte de las entidades, en las cuales se enuncia que ocho (8) entidades no reportaron.

Por lo anterior, a partir de medidas más específicas mediante la Política de Austeridad Pública y los Planes de Austeridad del Gasto para 2025 se tendría un ahorro de \$3,1 billones de pesos, y contabilizando otras medidas de Austeridad que crea el presente proyecto de ley, podría ascender a \$3,4 billones de pesos. Estas proyecciones se encuentran en línea con la Meta Nacional de Austeridad Pública definida en el artículo 6, dado que el 5 % de los gastos de personal y funcionamiento del PGN 2025, actualmente en debate legislativo mediante Proyecto de Ley N° 090 de 2024 Cámara "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025" sería alrededor de \$3,7 Billones, dado que lo asignado a la fecha en Gasto de Personal equivale a \$60,2 Billones y a Adquisición de Bienes y Servicios a \$15,5 Billones, en un total de \$75,7 Billones.

Cuadro 6. Proyección de Ahorro del gasto público para 2025

Concepto	Proyecciones de ahorro 2025
Consumo de Energía	\$ 599.669.487.060
Viáticos y Boleteros	\$ 748.768.049.020
Papelera, Góles de escritorio y Oficina	\$ 347.886.360.931
Bienes Muebles Específicos	\$ 317.968.712.908
Telefonía	\$ 304.146.598.402
Sostenibilidad Ambiental	\$ 250.264.281.166
Eventos Operadores	\$ 148.218.670.025
Vehículos	\$ 144.007.316.091
Horas Extras	\$ 106.878.409.277
Indemnización por Suscripción a Periódicos y Revistas	\$ 77.983.548.827
Servicios de Publicidad y/o Espacios publicitarios	\$ 41.388.866.841
Comisión de estudios y/o servicios al Exterior	\$ 41.550.025.876
Condecoraciones	\$ 8.589.579.473
Servicios de Investigación y Seguridad	\$ 1.340.625.090
Sub Total - Ahorro en gastos de personal y adquisición de bienes y servicios	\$ 3.192.085.881.489
Otras medidas de Austeridad Pública del Proyecto de Ley	\$ 226.579.316.091
Total	\$ 3.418.465.197.581

Fuente: Elaboración propia

De ahí que se haga necesario propender porque esta política se mantenga en el tiempo y los recursos dejados de invertir en rubros innecesarios, sean re direccionados hacia la inversión del Estado, con el objeto de reducir la pobreza, la desigualdad, el desempleo y otros asuntos relacionados con el Goce Efectivo de Derechos de los y las colombianas.

Finalmente, entre otros **Lineamientos para promover y priorizar la transparencia del gasto público** se encuentra mejores condiciones para la veeduría ciudadana por parte de los recursos administrados en Fondos y Fideicomisos. Según el "Anexo Mensaje Presidencial PGN 2025" existen 45 fondos especiales, y junto con 2 contribuciones parafiscales de la nación se programan \$22,2 billones para el año 2025, y su ejecución está en 8 entidades (p. 525 y 526). Estos recursos deben ser objeto de transparencia en su ejecución, por lo cual sobre los fondos y fideicomisos también se determinan lineamientos en procura la eficiencia y eficacia en la ejecución de sus recursos.

- Identificación de medidas de Austeridad Pública

La principal fuente de los recursos del Estado en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital son los ingresos corrientes que en promedio representan el 63 % a 65 %, los cuales

contemplan ingresos tributarios (internos y externos como IVA, Renta, arancel, entre otros; y no tributarios como multas y sanciones, entre otros⁵). Adicional a ello, el Estado tiene ingresos producto de los Recursos de Capital que representan alrededor del 28 %, los cuales son producto de operaciones como dividendos y utilidades de entidades como el Banco de la República, así como de Empresas Industriales y Comerciales del Estado societarias, entre otro tipo de operaciones contables.

Los gastos de funcionamiento dentro de los recursos del PGN se distribuyen a través de las siguientes líneas: a) gastos para adquisición de bienes y servicios, a través de la cual se destinan recursos para la adquisición de activos no financieros y de diferentes activos como materiales y suministros, servicios, gastos imprevistos y gastos reservados; b) gastos de personal, a través de la cual se financia lo correspondiente a salarios, contribuciones relacionadas con nómina c) transferencias corrientes d) transferencias de capital e) f) gastos de comercialización y producción; f) adquisición de activos financieros g) disminución de pasivos h) gastos por tributos. Para 2024 el presupuesto de Funcionamiento se ubicó en \$308,2 billones correspondiente al 61,3 % del PGN 2024, donde Gastos de Personal se estima en \$55 billones y Adquisición de Bienes y Servicios en \$13,7 billones (Ver Cuadro 7).

Cuadro 7. PGN 2024 Principales cuentas del gasto (Datos en miles de millones de pesos)

Concepto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A - Funcionamiento	281.099	61,7	208.224	61,3	47.125	18,0	16,3	18,1
Gastos de Personal	47.839	11,8	55.813	10,0	7.283	16,8	3,8	3,2
Sector Defensa y Policía	21.768	5,1	20.617	4,0	1.888	12,0	1,4	1,2
Resto de Sectores	26.071	6,7	35.196	6,0	5.395	17,4	1,6	1,6
Adq. Bienes y Servicios	13.388	3,3	13.268	2,7	406	2,0	0,8	0,8
Sector Defensa y Policía	5.822	1,4	6.827	1,4	1.104	1,0	0,4	0,4
Resto de Sectores	7.566	1,9	6.441	1,4	2.962	2,0	0,4	0,4
OT Tr. Corrientes	189.747	46,5	204.977	46,8	29.320	30,8	13,9	13,9
OT Tr. Corrientes	34.964	8,6	30.541	6,2	15.003	20,4	1,4	1,4
Pensiones	47.238	11,7	55.321	11,0	7.784	16,3	3,0	3,3
Aseguaramiento en salud	24.667	6,2	25.713	7,0	566	1,6	2,2	2,1
REPOB (Pensiones, salud y resarcita)	18.256	4,5	18.412	3,1	2.028	19,0	1,1	0,9
USOP	12.578	3,0	15.648	3,1	2.909	23,1	0,8	0,3
USOP	5.217	1,2	5.910	1,2	716	11,7	0,3	0,3
Sanciones	1.536	0,4	1.744	0,3	205	13,6	0,1	0,1
Resto de Transferencias	29.094	4,0	30.724	2,0	14.381	19,5	1,2	2,1
OT Tr. Capital	228	0,1	858	0,2	211	38,3	0,0	0,0
OT Gtas. Comercialización y producción	1.430	0,3	1.227	0,3	-82	-0,8	0,1	0,1
OT Adquisición de activos financieros	793	0,2	720	0,1	-83	-0,9	0,0	0,0
OT Dta. Pasivos	851	0,2	347	0,1	-304	-37,0	0,0	0,0
OT Gtas por Tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.139	0,3	1.225	0,3	108	0,4	0,1	0,1
B - Servicio de la deuda	79.488	19,6	64.823	16,6	16.034	36,4	4,0	3,4
Principales	21.862	5,4	17.877	3,4	6.418	17,0	1,0	1,2
Acuerdos Marco de Distribución	2.002	0,5	2.016	0,1	1.423	19,2	0,1	0,0
Resto del Servicio de la Deuda	27.822	7,1	20.722	7,2	6.888	23,0	1,9	2,2
Intereses	43.134	10,7	46.220	11,0	13.898	39,3	2,6	3,8
Comisiones y otros gastos	409	0,1	859	0,1	99	24,0	0,0	0,0
Fondo de Contingencias	4.823	1,2	4.427	1,1	2.000	19,4	0,2	0,1
C - Inversión	83.247	20,7	103.811	26,6	16.484	18,8	7,5	5,9

* La vigencia 2023 es aproximación vigente a 30 de Junio con aproximación de cierre - Ley 2299 del 2023 (última reforma tributaria)

⁵ Para ampliar información, ver Catálogo de ingresos en el Presupuesto General de la Nación disponible en https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=ConexionContent/WCC_CLUSTER-064819

Fuente: Tomado de Presentación de Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda, en el trámite legislativo del PGN 2024.

Los gastos de funcionamiento desde el 2017 han representado alrededor del 60 % del presupuesto, sin embargo, las desagregaciones ampliadas de los gastos de funcionamiento se tienen desde el 2019. En una perspectiva temporal, la mayoría de rubros han tenido una reducción, por ejemplo, de Adquisición de bienes y servicios pasó de representar el 6,2 % en 2019 a representar 4,6 % en 2024; a excepción del rubro Transferencias, el cual ha tenido un crecimiento del 72,2 % en 2019 al 76,2 % en 2024.

Cuadro 8. Apropiaciones Presupuesto General de la Nación-PGN- 2000 - 2018 discriminado por concepto

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I - Funcionamiento	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	
II - Adquisición de bienes y servicios	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
III - Transferencias	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

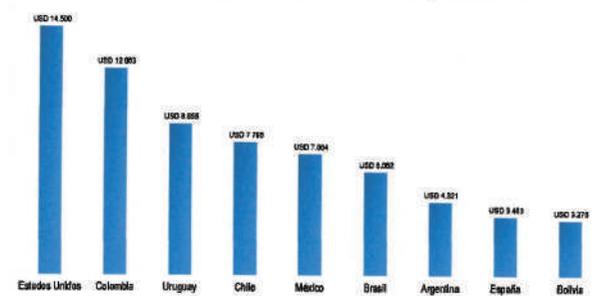
Fuente: Elaboración propia, tomado de Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal (MinHacienda, 2024c)

Los gastos de personal en las últimas dos décadas han representado en promedio el 20 % del PGN, donde se han tenido variaciones, por ejemplo, la menor participación fue en 2020 con 15,6 % y la mayor participación fue en el año 2000 con 24 %. El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana (2023) presentó el top de las 10 entidades del Estado con mayores salarios para sus directivos en 2023, dentro de las que se encuentra el Fondo de Adaptación, cuya gerencia tiene una remuneración mensual cercana a los \$79.202.150; Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, cuya presidencia tiene una asignación mensual de \$ 76.656.591; la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, cuya dirección tiene una remuneración mensual de \$ 76.156.223; el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en donde los y las magistradas tienen una asignación mensual de \$ 61.924.444; la Jurisdicción Especial para la Paz, con una remuneración mensual de \$ 61.737.805 para sus magistrados y magistradas; la Superintendencia de Sociedades, cuyo Superintendente devenga mensualmente \$ 55.946.665 y, la Dirección Nacional del Derecho de Autor, cuya dirección tiene una remuneración mensual de \$ 49.323.108.

El cálculo de estos valores, realizado por el Observatorio Fiscal, incluyó todos los ingresos recibidos por conceptos asociados a la nómina, como primas, salud y pensión, gastos de representación en los casos que aplica, etc.; sin embargo, estos valores no incluyen por

supuesto rubros adicionales que reciben estos funcionarios a través del pago de viáticos por comisiones de servicios, pago de transporte oficial, planes de telefonía celular, tiquetes aéreos, muchas veces en clase ejecutiva, entre otros que, al ser sumados, elevarían significativamente el monto del Presupuesto Nacional que se destina mensualmente para los mismos. En el caso de las y los congresistas en Colombia se tiene que su salario es en la actualidad uno de los más elevados del mundo, comparado en moneda internacional dólar, tal y como se observa en la gráfica 3.

Gráfica 3. Salario mensual de congresistas en dólares para el año 2024



Fuente: Elaboración propia con base en los salarios de congresistas para el año 2024 y con tasa de cambio de referencia el día 22 de Julio de 2024

Además de los altos salarios, existe un conjunto de gastos de funcionamiento de las entidades públicas, en los que precisamente sus directivos son los principales destinatarios de los mismos. Estos recursos aumentan significativamente el monto destinado a gastos de funcionamiento del Estado, sin que ello tenga un impacto directo en el cumplimiento de la misionalidad de la entidad, lo que significa que es posible realizar un ajuste a los mismos sin que ello redunde en el desmejoramiento de condiciones dignas de trabajo ni en afectaciones en el componente misional a cargo de la entidad. A continuación, se presentan un conjunto de gastos identificados:

- a. **Cálculo de viáticos:** "El reconocimiento y pago de viáticos es un derecho de los servidores que prestan sus servicios en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, cuya razón de ser es solventar los gastos adicionales en que incurrir el

<p>comisionado por concepto de alojamiento, alimentación y transporte, y que no debe asumir de su propio peculio⁶.</p> <p>La Ley 4 de 1992, "Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política", definió:</p> <p><i>"ARTÍCULO 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2 el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.</i></p> <p><i>Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.</i></p> <p><i>Los aumentos que decreta el Gobierno Nacional conforme a este artículo, producirán efectos fiscales a partir del primero de enero del año respectivo."</i></p> <p>De acuerdo con lo establecido, ello aplica para:</p> <ol style="list-style-type: none"> Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; Los empleados del Congreso de la República, la Rama Judicial, el <u>Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación</u>, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; Los miembros de la Fuerza Pública. <p>Por su parte, el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", definió en su artículo 2.2.5.5.27:</p> <p>⁶ Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 125681 de 2017. Radicado No.: 20176000125681. 31 de mayo de 2017. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82254. (Fecha de consulta: 20 de febrero de 2024).</p>	<p><i>"Derechos del empleado en comisión de servicios. El empleado en comisión de servicios en una sede diferente a la habitual tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración mensual que corresponde al cargo que desempeña y al pago de viáticos y, además, a gastos de transporte, cuando estos últimos se causen fuera del perímetro urbano. El valor de los viáticos se establecerá de conformidad con los lineamientos y topes señalados en el decreto anual expedido por el Gobierno Nacional.</i></p> <p><i>Cuando la totalidad de los gastos que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad no habrá lugar al pago de viáticos y gastos de transporte. Tampoco habrá lugar a su pago cuando la comisión de servicios se confiera dentro de la misma ciudad.</i></p> <p><i>Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad, únicamente se reconocerá la diferencia".</i></p> <p>Así las cosas, anualmente el Gobierno Nacional expide un Decreto en el que se fijan las escalas de viáticos. Actualmente, los Decretos 908 de 2023 (junio 2) y 303 de 2024 (marzo 5) "Por el cual se fijan las escalas de viáticos", definió el rango de viáticos que deberá aplicarse a las comisiones que se adelanten dentro y fuera del país, siendo el monto mínimo diario de \$136.975 para aquellos servidores que adelanten comisiones dentro del país y que devenguen hasta \$1.510.229, mientras que el tope diario fue fijado en \$1.039.425, para servidores con ingresos de más de \$18.085.359.</p> <p>Por su parte, el Decreto fijó el monto hasta 80 dólares americanos (en adelante, USD) diarios para servidores que adelanten comisiones de servicios hacia el exterior, en países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, excepto Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico, siempre que sus ingresos sean menores a \$1.510.229; y hasta 100 USD diarios, si los desplazamientos son hacia Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, África y Puerto Rico, y un valor de hasta 140 USD diarios, si los desplazamientos son hacia Europa, Asia, Oceanía, México y Argentina.</p> <p>En el mismo sentido, el tope fijado para este tipo de desplazamientos al exterior, respecto de aquellos servidores que devengan más de \$18.085.359, se estableció en 440 USD diarios -si la comisión de servicios se adelanta en países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, excepto Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico-; y hasta 500 USD diarios, si los desplazamientos son hacia Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, África y Puerto Rico, y un valor de hasta 640 USD diarios, si la comisión se adelanta en Europa, Asia, Oceanía, México y Argentina.</p>
<p>No obstante, estos mínimos y topes fijados anualmente por el Gobierno Nacional, los organismos y entidades deben definir lo correspondiente para sus funcionarios, a través de Actos Administrativos, tal y como reza en el artículo 2 del precitado Decreto 908 de 2023:</p> <p>ARTÍCULO 2. Determinación del valor de viáticos. <i>Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las cantidades señaladas en el artículo anterior.</i></p> <p><i>Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación y los incrementos de salario por antigüedad.</i></p> <p><i>Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento (50 %) del valor fijado.</i></p> <p>Ahora bien, el Decreto 199 de 2024 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, estableció respecto a este asunto:</p> <p>Artículo 8. Reconocimiento de viáticos. <i>Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán aplicar las siguientes medidas para el reconocimiento de los viáticos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Cuando la totalidad de los gastos para manutención y alojamiento que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad, no habrá lugar al pago de viáticos.</i> <i>Cuando los gastos por concepto de viáticos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad, únicamente se podrá reconocer la diferencia en forma proporcional a criterio de la entidad, y con fundamento en la normativa aplicable a la materia.</i> <i>Cuando la comisión de servicios no requiera que el servidor público pernocte en el lugar de la comisión, la administración podrá reconocer un</i> 	<p><i>valor menor al cincuenta por ciento (50 %) a que hacen referencia los decretos salariales para lo cual tendrán en cuenta los costos del lugar al que se desplaza el servidor.</i></p> <p>Con base en lo anteriormente expuesto se tiene que, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, tal y como lo dispuso la Resolución No. 1159 de 09 de junio de 2023 "Por la cual se establece la escala para el reconocimiento y pago de viáticos de los servidores públicos y gastos de desplazamiento de los contratistas de la Defensoría del Pueblo", un funcionario que devenga menos de \$1.510.229, tiene actualmente un monto diario asignado de \$136.975, mientras que a un funcionario que devenga mensualmente más de \$18.085.359, recibirá diariamente \$ 893.906.</p> <p>En el caso de la Gobernación departamental de Antioquia, a través del Decreto de 20 de noviembre de 2023, "Por el cual se fija las escalas de viáticos y se establecen otras disposiciones para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Departamento de Antioquia y sus entidades descentralizadas", se establecieron los mínimos y máximos definidos por el Gobierno Nacional en el Decreto 908 de 2023, esto es, un funcionario que devenga menos de \$1.510.229, tiene actualmente un monto diario asignado de \$136.975, mientras que a un funcionario que tiene una remuneración mensual de más de \$18.085.359, se le asigna un monto diario de \$1.039.425.</p> <p>Para el caso funcionarios y empleados de las Altas Cortes, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Resolución No. 0736 de 17 de mayo de 2022⁷, estableció que aquellos desplazamientos desde la ciudad de Bogotá hacia municipios de Cundinamarca a una distancia inferior a 100 Km., no causarán viáticos, pero se reconocerán los gastos de viaje cuando el acto administrativo que confiere la comisión lo autorice.</p> <p>⁷ Emanada en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo No. PSA16-10482 de marzo de 2016 "Por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 05 de septiembre 10 de 1992 y se dictan medidas de austeridad en materia de viáticos" de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo artículo primero se estableció que "las escalas de viáticos serán establecidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y para cada Distrito Judicial por las Direcciones Seccionales de Administración Judicial en cada vigencia, de conformidad con el decreto que expida el Gobierno Nacional para el año respectivo".</p> <p><i>En esta escala de viáticos, podrán fijarse tarifas diferenciales de conformidad con la distancia al lugar de la comisión".</i></p>

Por su parte, definió que, respecto a los desplazamientos hacia municipios del departamento de Cundinamarca con distancia superior a 100 km desde la ciudad de Bogotá, se pagará por día pernoctado el 50 % del valor fijado por el Gobierno Nacional y, para desplazamientos desde la ciudad de Bogotá hacia ciudades y municipios del resto del país y el exterior, se pagará el 90 % del valor fijado por el Gobierno Nacional, al tiempo que se reconocerán los gastos de viaje (pasajes terrestres, fluviales y/o aéreos, y/o peajes y gasolina para vehículos oficiales).

Como se observa, el cálculo del valor de los viáticos a pagar en función de la remuneración mensual del empleado comisionado, desvirtúa la función de este rubro, que es la de cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando los empleados públicas deben desempeñar sus funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, máxime si se tienen en cuenta la diferencia que puede resultar de los montos asignados a 2 empleados comisionados para realizar un desplazamiento al mismo lugar, y el hecho de que los montos diarios que derivan de ellos, algunas veces pueden ser insuficientes y en otros casos excesivos, teniendo en cuenta el costo de vida del municipio hacia el cual se realiza el desplazamiento.

Por ejemplo, si a una misma comisión al municipio de Apartadó (Antioquia), en donde el valor promedio de la noche en un hotel estándar es de \$90.000 y el valor de la alimentación diaria (desayuno, almuerzo y cena) en un restaurante básico es de alrededor de \$50.000, se asigna una comisión a 2 funcionarios con idénticos desplazamientos, uno que devenga \$1.510.229 mensuales, y otro que devenga más de \$18.085.359, se tendrá que el monto mínimo diario asignado al primero (\$136.975) resultará probablemente insuficiente para cubrir sus gastos de alojamiento, alimentación y transporte al interior del municipio, mientras que el monto asignado al segundo será excesivo (\$1.039.425), y se estaría pagando al funcionario un valor muy superior al requerido para cubrir esos gastos, situación que por demás podría estar constituyendo un ingreso adicional del funcionario, con los efectos tributarios que ello debería tener⁸.

⁸ Al respecto, la DIAN en Oficio 908123 DE 2021, y retomando el oficio No. 026090 de 16 de octubre 2019, indicó que "(...) los viáticos son uno de los ingresos recibidos dentro de la relación laboral legal o reglamentaria. Pueden ser ocasionales o permanentes. Los ocasionales son los recibidos en forma esporádica o extraordinaria para cubrir gastos de alimentación, alojamiento y transporte del trabajador para desarrollar labores fuera de su sede. Los permanentes recibidos en forma regular por los trabajadores, que prestan por sus funciones fuera de la sede en forma habitual. Los ocasionales, en cuanto constituyen reembolso de gastos por concepto de manutención, alojamiento y transporte en que haya incurrido el trabajador para desempeño de sus funciones, no constituyen ingresos cuando se entreguen al pagador las facturas y demás pruebas documentales que sustentan el reembolso para que el pagador las pueda tomar como gastos propios de la empresa. En el evento en que lo recibido no corresponda a reembolso de gastos constituye ingreso. Los viáticos permanentes por constituir un ingreso regular del trabajador se considera salario". De lo anterior se puede

Como lo señaló la Sección Segunda del Consejo de Estado en Sentencia de abril 2 de 2009 radicado 11001032400020050032800 (1048-06) MP Bertha Lucía Ramírez de Páez, "los viáticos son en estricto sentido, el reconocimiento que recibe un servidor público que se encuentra en comisión de servicios, con el único fin de cubrir los gastos de manutención y alojamiento en que incurra durante el término que perdure la situación administrativa en que se encuentra (...). Es bien sabido que los viáticos de una comisión no constituyen retribución del servicio prestado por el funcionario, sino el pago que debe recibir para cubrir los gastos de manutención y alojamiento".

En consecuencia, y en aras de la consecución de los fines que tiene el pago de los viáticos a servidores públicos, y con el fin de generar unas condiciones de equidad y de bienestar en la totalidad de servidores públicos que realizan comisiones de servicios, al tiempo que ello redunde en una política de austeridad que redunde en la disminución de gastos innecesarios de funcionamiento del Estado, se estima que el cálculo de la escala de viáticos que fije anualmente el gobierno nacional, deberá dejar de ser realizado en función de los ingresos de los servidores públicos y, en cambio, deberá pasar a fijarse con base en el promedio diario del costo de vida de los lugares hacia los que se adelantan los desplazamientos (incluyendo la media en el costo de hoteles, alimentación en restaurantes y transporte interno), cálculo que anualmente deberá realizar el DANE.

b. **Suministro de tiquetes aéreos:** El Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", definió:

"ARTÍCULO 2.2.5.5.28 Suministro de pasajes. A los comisionados al exterior se les podrá suministrar pasajes, aéreos, marítimos o terrestres solo en clase económica.

El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, los Presidentes de las Altas Cortes, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Defensor del Pueblo, podrán viajar en primera clase.

concluir que solamente se pueden exceptuar del carácter de ingresos los viáticos ocasionales cuando ellos son asumidos como gastos propios de la empresa".

Los Viceministros del Despacho, los Directores y Subdirectores de los Departamentos Administrativos, los miembros del Congreso, los Embajadores, los Magistrados de las Altas Cortes, los Superintendentes, los Ministros Consejeros, los Secretarios y los Consejeros Presidenciales de la Presidencia de la República, el Presidente de Ecopetrol S.A., el Alto Comisionado para la Paz, el Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas podrán viajar en clase ejecutiva.

PARÁGRAFO. Los Embajadores y Embajadores en Misiones Especiales podrán viajar en primera clase, previa autorización del Ministro de Relaciones Exteriores".

Por su parte, el Decreto 444 de 2023 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación", estableció respecto a este asunto:

ARTÍCULO 7. Suministro de tiquetes. *Los viajes aéreos nacionales e internacionales de servidores de todos los órganos que pertenecen al Presupuesto General de la Nación, deberán hacerse en clase económica o en la tarifa que no supere el costo de esta, salvo los debidamente justificados, y en aquellos casos en los cuales los Ministros de Despacho tengan por objeto promover y gestionar el financiamiento de la Nación, o que el vuelo tenga una duración de más de ocho (8) horas. Para el caso de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, estos deberán justificarse ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.*

Cuando el servidor haga parte de la comitiva que acompañe al Presidente de la República o Vicepresidenta de la República y se transporte en el avión presidencial o en el medio de transporte que se designe para transportar al Presidente de la República o Vicepresidenta de la República, no habrá lugar al pago de gastos de transporte.

Los gastos de viaje se autorizarán únicamente si no están cubiertos por la entidad o por las entidades que organizan los eventos.

En este marco, resulta conveniente que el suministro de tiquetes en clase ejecutiva de los funcionarios de alto nivel del Estado, parta de la evaluación de su conveniencia para las

labores y la agenda de estos funcionarios en el marco de la comisión que se adelanta, independientemente del cargo que ostenta, con excepción del Presidente (a) y Vicepresidenta (e) de la República.

Dicho esto, se considera conveniente prohibir expresamente la asignación de este tipo de tiquetes en clase ejecutiva para viajes nacionales, y que ello únicamente proceda respecto a viajes internacionales de los Ministros del Despacho, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, los Presidentes de las Altas Cortes, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Defensor del Pueblo y, eventualmente de los Viceministros del Despacho, los Directores y Subdirectores de los Departamentos Administrativos, los miembros del Congreso, los Embajadores, los Magistrados de las Altas Cortes, los Superintendentes, los Ministros Consejeros, los Secretarios y los Consejeros Presidenciales de la Presidencia de la República, el Presidente de Ecopetrol S.A., el Alto Comisionado para la Paz, el Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (antes Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas), y los Embajadores y Embajadores en Misiones Especiales, en el evento en el que respecto a países con más de 8 horas de distancia en vuelo, la primera actividad programada en la agenda de éstos tenga una diferencia menor a 12 horas respecto a la hora prevista de llegada o, cuando esta situación ocurra una vez se retorne al país.

Así, si un funcionario de alto nivel que realiza un desplazamiento de más de 8 horas a un destino internacional, pero en el que la diferencia entre la hora prevista de llegada y la hora pactada para el cumplimiento del primer punto de su agenda, es superior a 12 horas, no será posible la asignación de tiquetes aéreos en clase ejecutiva, independientemente del cargo que ostente, con excepción del Presidente (a) y Vicepresidenta (e) de la República.

De igual manera, si al momento del retorno al país, ese mismo funcionario realiza el mismo desplazamiento de más de 8 horas, pero la diferencia entre la hora de llegada a Colombia y la primera actividad que tiene en su agenda luego de esto, es superior a 12 horas, no será posible la asignación de tiquetes aéreos en clase ejecutiva, independientemente del cargo que ostente, con excepción del Presidente (a) y Vicepresidenta (e) de la República.

No obstante, lo anterior, se deberá privilegiar en cualquier caso la asignación de tiquetes en clase turista.

c. **Asignación de vehículos oficiales:** El Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" definió una serie de medidas de austeridad en el gasto público. Respecto a la asignación de vehículos oficiales, estableció:

<p>ARTÍCULO 2.8.4.6.6. Asignación de vehículos. Se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores: Presidente de la República, Altos Comisionados, Ministros Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios; directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas orgánicas, tengan rango de directores de ministerio; embajadores y cónsules generales de Colombia con rango de embajador; superintendentes, superintendentes delegados, y secretarios generales de superintendencias; directores y subdirectores, presidentes y vicepresidentes de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y empresas industriales y comerciales del Estado, así como a los secretarios generales de dichas entidades; rectores, vicerrectores y secretarios generales de entes universitarios autónomos del nivel nacional; senadores de la República y representantes a la Cámara, y secretarios generales de estas corporaciones; magistrados de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral); Contralor General de la República, Vicecontralor y Secretario General de la Contraloría General de la República; Procurador General de la Nación, Viceprocurador, Secretario General de la Procuraduría General de la Nación; Defensor del Pueblo y Secretario General de la Defensoría del Pueblo; Registrador Nacional del Estado Civil y secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil; Fiscal General de la Nación, Vicefiscal y Secretario General de la Fiscalía General de la Nación y generales de la República; al Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.</p> <p>En las altas cortes, el Congreso de la República, los organismos de investigación, los organismos de fiscalización y control y la organización electoral, se podrá asignar vehículo a quienes ocupen cargos del nivel directivo equivalente a los aquí señalados para los Ministerios.</p> <p>En caso de existir regionales de los organismos señalados en este artículo, podrá asignarse vehículo al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.</p> <p>En las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, la asignación de</p>	<p>vehículos se hará de conformidad con sus necesidades operativas y con las normas vigentes.</p> <p>PARÁGRAFO 1. En el evento de existir primas o préstamos económicos para adquisición de vehículo en los organismos antes señalados, la asignación de vehículos se sujetará a las normas vigentes que regulan tales primas o préstamos.</p> <p>PARÁGRAFO 2. Se exceptúa de lo dispuesto en el presente artículo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidad que asignará, por intermedio de su Director, los vehículos de uso oficial a sus funcionarios teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública.</p> <p>Exceptuase de la aplicación del presente artículo teniendo en cuenta las funciones de carácter diplomático y protocolario que ejerce, al Ministerio de Relaciones Exteriores.</p> <p>El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos del tesoro público a las personas que por sus funciones ya sean de carácter diplomático o protocolarios así lo requieran, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública.</p> <p>(Art. 17 Decreto 1737 de 1998, modificado por el art. 8 del Decreto 2209 de 1998, adicionado por el art 2 del Decreto 2316 de 1998, modificado por el art. 4, Decreto 2445 de 2000, adicionado por art. 2 Decreto 134 de 2001 y modificado por el art 1 del decreto 644 de 2002)</p> <p>ARTÍCULO 2.8.4.6.7. Vehículos operativos. En los órganos, organismos, entes y entidades enumeradas en el artículo anterior se constituirá un grupo de vehículos operativos administrados directamente por la dependencia administrativa que tenga a su cargo las actividades en materia de transportes. Su utilización se hará de manera exclusiva y precisa para atender necesidades ocasionales e indispensables propias de las funciones de cada órgano y en ningún caso se podrá destinar uno o más vehículos al uso habitual y permanente de un servidor público distinto de los mencionados en el artículo anterior.</p> <p>Será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, observar el cabal cumplimiento de esta disposición. De igual modo, será</p>
<p>responsabilidad de cada conductor de vehículo, de acuerdo con las obligaciones de todo servidor público, poner en conocimiento de aquél la utilización de vehículos operativos no ajustada a estos parámetros.</p> <p>(Art. 18 Decreto 1737 de 1998, inciso 1 derogado por el Decreto 2710 de 2014, artículo 41, literal A, numeral 2.1)</p> <p>ARTÍCULO 2.8.4.6.8. Traslado de servidores públicos fuera de la sede. Los servidores públicos que por razón de los labores de su cargo deban trasladarse fuera de su sede no podrán hacerlo con vehículos de ésta, salvo cuando se trate de localidades cercanas y resulte económico.</p> <p>No habrá lugar a la prohibición anterior cuando el desplazamiento tenga por objeto visitar obras para cuya inspección se requiera el uso continuo del vehículo.</p> <p>Aun así, lo definido en el precitado Decreto no sólo genera importantes gastos a las entidades con ocasión de la asignación de vehículos oficiales en función del cargo que ostentan las personas, independientemente de las necesidades del servicio de la entidad y las condiciones para el ejercicio de la función pública; sino que además profundiza las brechas internas en las entidades y no redundará en una mejora en la prestación del servicio a cargo, pues permanente se evidencian situaciones en las que, ante la insuficiencia de vehículos operativos en las entidades, en detrimento de un número importante de vehículos disponibles en los parqueaderos -en el mejor de los casos- esperando el desplazamiento de funcionarios de Alto nivel-, funcionarios de menor rango que adelantan de manera permanente desplazamientos en territorio y hacia comunidades, carecen de vehículos para lo correspondiente, con las consecuencias que esto muchas veces genera en términos de seguridad, eficiencia en el uso del tiempo, traslado de insumos y materiales de trabajo, entre otras.</p> <p>Por lo anterior, se estima necesario que los vehículos oficiales tengan únicamente destinación para el funcionario(a) responsable de cada entidad y el segundo a cargo, es decir, en el caso de Ministerios, Ministros y Viceministros; en el caso de entidades, Director y Subdirector; Presidente y Vicepresidente de entidad; Defensor y Vicedefensor del Pueblo, etc.; en el caso de las Altas Cortes, los y las magistradas, en el entendido de que éstos deben cumplir permanentemente con una agenda que implica desplazamientos fuera de su lugar de trabajo y traslados casi que simultáneos entre diferentes lugares. En caso de que estos funcionarios tengan asignados vehículos que hagan parte de esquemas de protección, no procederá esta asignación.</p>	<p>Respecto a los demás funcionarios, incluyendo Directores Administrativos, Secretarios Generales de las entidades, y demás funcionarios, se estima necesario que éstos hagan uso de los vehículos operativos con los que cuente la entidad, previa programación de los mismos de acuerdo con la agenda que deban desarrollar fuera de las instalaciones de la misma. Adicional a ello, se considera prudente que ningún vehículo oficial se destine para el traslado de estos servidores desde y hacia sus lugares de residencia, excepto en los casos en los que dentro de la agenda laboral de un funcionario distinto al responsable y su segundo a cargo, se requieran desplazamientos antes de las 6:30 a.m. y después de las 8:00 p.m. y/o fuera de la ciudad/municipio en que desarrollan sus actividades laborales.</p> <p>d. Asignación de telefonía celular: El precitado Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" estableció con relación a la asignación de teléfonos celulares:</p> <p>ARTÍCULO 2.8.4.6.5. Asignación de Teléfonos celulares. Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presidente y Vicepresidente de la República. 2. Altos Comisionados. 3. Ministros Consejeros Presidenciales. 4. Secretarios y Consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 5. Ministros del Despacho. 6. Viceministros. 7. Secretarios Generales y Directores de Ministerios. 8. Directores, Subdirectores, Secretarios Generales y Jefes de Unidad de Departamentos Administrativos y funcionarios que en estos últimas, de acuerdo con sus normas orgánicas, tengan rango de directores de Ministerio. 9. Embajadores y Cónsules Generales de Colombia con rango de Embajador. 10. Superintendentes, Superintendentes Delegados y Secretarios Generales de Superintendencias.

<p>11. Directores y Subdirectores, Presidentes y Vicepresidentes de establecimientos públicos, Unidades Administrativas Especiales y Empresas Industriales y Comerciales del Estado, así como los Secretarios Generales de dichas entidades.</p> <p>12. Rectores, Vicerrectores y Secretarios Generales de entes universitarios autónomos del nivel nacional.</p> <p>13. Senadores de la República y Representantes a la Cámara, Secretarios Generales de estas Corporaciones, Secretarios de Comisiones, Subsecretarios del Senado y de la Cámara de Representantes.</p> <p>14. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral.</p> <p>15. Contralor General de la República, Vicecontralor y Secretario General de la Contraloría General de la República.</p> <p>16. Procurador General de la Nación, Viceprocurador y Secretario General de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>17. Defensor del Pueblo y Secretario General de la Defensoría del Pueblo.</p> <p>18. Registrador Nacional del Estado Civil y Secretario General de la Registraduría Nacional del Estado Civil.</p> <p>19. Fiscal General de la Nación, Vicefiscal y Secretario General de la Fiscalía General de la Nación.</p> <p>20. Generales de la República.</p> <p>21. Director General del Senado de la República.</p> <p>22. Auditor General de la República, Auditor Auxiliar y Secretario General de la Auditoría General de la República.</p> <p>En caso de existir regionales de los organismos antes señalados, podrá asignarse un teléfono celular al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.</p> <p>PARÁGRAFO 1. Se exceptúa de la aplicación del presente artículo:</p>	<p>a) Al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, entidades que asignarán, por intermedio de su Director, los teléfonos celulares a sus funcionarios teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública;</p> <p>b) Al Ministerio de Relaciones Exteriores y se autoriza al Secretario General de dicho Ministerio para asignar teléfonos celulares, con cargo a los recursos del Tesoro Público, a las personas que por sus funciones de carácter diplomático o protocolario así lo requieran, teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública;</p> <p>c) A los organismos de investigación y fiscalización, entendidos por estos, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General de la República, así como los de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y se autoriza a los secretarios generales de los mismos, para asignar teléfonos celulares a otros servidores de manera exclusiva, para el desarrollo de actividades especiales de investigación y custodia, sin que dicha asignación pueda tener carácter permanente. Así mismo, los secretarios generales de las entidades mencionadas en el artículo siguiente, o quienes hagan sus veces, podrán asignar teléfonos celulares para la custodia de los funcionarios públicos de la respectiva entidad, cuando así lo recomienden los estudios de seguridad aprobados en cada caso por la autoridad competente;</p> <p>d) A Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y se autoriza a los secretarios generales de los mismos o a quienes hagan sus veces para asignar, bajo su responsabilidad, teléfonos celulares para uso del personal técnico en actividades específicas;</p> <p>e) A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y se autoriza a su Secretario General para asignar teléfonos celulares con cargo a recursos del Tesoro Público a los empleados públicos de la entidad, para el desarrollo de labores de investigación control, fiscalización y de ejecución de operativos tendientes a optimizar la gestión en la administración y en el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y para garantizar la prestación eficiente del servicio público tributario, aduanero y cambiario de carácter esencial a cargo de la institución, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 53 de la Ley 633 de 2000. Así mismo, se podrá asignar un teléfono</p>
<p>celular al Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como a los servidores públicos del Ministerio de Transporte, que estén a cargo de una Inspección Fluvial permanente a nivel regional y cuyos costos y tarifa resulten menores a los consumos de líneas fijas debidamente demostrados en forma comparativa;</p> <p>f) Al Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, y se autoriza al Director Administrativo y Financiero del mismo para asignar teléfono celular, con cargo a los recursos de la entidad, a los Subdirectores de los Centros de Formación y a los Jefes de Oficina del Sena, previa expedición del acto administrativo mediante el cual señale el monto máximo de uso de los mismos;</p> <p>g) A los Ministerios y Departamentos Administrativos, en cuanto sus competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres, en particular el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de integrantes del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Tales entidades asignarán, por intermedio de su representante legal, los teléfonos celulares a sus funcionarios teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio en la atención y prevención de desastres, y las condiciones para el ejercicio de la función pública.</p> <p>h) A la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se autoriza a su Secretario General para asignar teléfonos celulares con cargo a recursos del Tesoro Público, a los empleados públicos de las dependencias misionales, directiva y de coordinación de la entidad, como son: los administradores aeroportuarios; los jefes y supervisores de torres de control y de centros de control; personal de soporte técnico, meteorología, AIS/COM/MET, planes de vuelo, seguridad aérea, seguridad aeroportuaria, bomberos aeronáuticos, búsqueda y rescate y atención al usuario.</p> <p>PARÁGRAFO 2. Las entidades a que se refiere el parágrafo anterior, velarán por que exista una efectiva compensación en los gastos de adquisición de servicios, con la reducción de los costos en el servicio de telefonía básica conmutada de larga distancia.</p>	<p>PARÁGRAFO 3. La limitación del presente artículo comprende únicamente el suministro de los equipos terminales y el pago del servicio por concepto de comunicaciones de voz móvil, denominado en el presente título indistintamente como celulares.</p> <p>Las entidades a las que se encuentran vinculados los servidores públicos a quienes les aplica el presente título podrán, con cargo a su presupuesto de servicios, asignar a sus empleados planes de datos o de acceso a internet móvil, para lo cual al Interior de la entidad se deberán definir las condiciones para la asignación. Los planes asumidos por la entidad deberán ser de aquellos que no permitan consumos superiores a los contratados por la entidad, denominados comúnmente como planes controlados o cerrados.</p> <p>En todo caso, los destinatarios del servicio, salvo las personas que pueden ser beneficiarias de un servicio celular en los términos del presente artículo, deberán tener contratado por su cuenta el servicio móvil de voz y asumir integralmente su costo. De igual manera, deberán proporcionar el equipo terminal que permita el uso del servicio de datos.</p> <p>El director de la entidad responsable deberá adoptar las medidas necesarias para:</p> <p>(i) Verificar que los planes autorizados a sus funcionarios no sean cedidos o transferidos por estos a personal ajeno a la misma.</p> <p>(ii) Verificar cuando menos semestralmente el uso que se está dando al servicio.</p> <p>(iii) Verificar que una vez finalizada la relación laboral, el proveedor del servicio de comunicaciones con el cual tiene contratado el servicio, suspenda su prestación.</p> <p>Aun tratándose de una medida que, de acuerdo con el Decreto propende por la austeridad, se observa que, la asignación de teléfonos celulares y de planes de telefonía celular se dispone, respecto a algunos funcionarios, con ocasión de su cargo y, respecto a otros, habilita la posibilidad de que ello se realice en atención únicamente las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública.</p> <p>Así, y teniendo en cuenta que la asignación de teléfonos celulares y planes de telefonía a los funcionarios referidos en el precitado artículo 2.8.4.6.5., ocurre muchas veces en un escenario de limitados recursos de comunicación asignados a las áreas de servicio a la</p>

ciudadanía, o en aquellas a cargo de la atención permanente de emergencias, y que esta asignación conlleva la adquisición permanente de equipos de última gama, se considera necesario limitar el valor de los equipos a adquirir por con cargo al Presupuesto Nacional y evitar su asignación en función del cargo que ostenta la persona, privilegiando en cambio la asignación de equipos y planes de telefonía únicamente bajo el criterio de necesidades del servicio y de garantía de condiciones para el adecuado ejercicio de la misionalidad de la entidad, al tiempo que se establezcan unos topes respecto al costo de estos teléfonos.

IV. MARCO NORMATIVO

Marco constitucional

Artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Artículo 334: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. (...) La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. (Subrayado para enmarcar la idea)

Marco normativo

Artículo 19 de la Ley 2155 de 2019:

ARTÍCULO 19°. PLAN DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. En desarrollo del mandato del artículo 209 de la Constitución Política y con el compromiso de reducir el Gasto Público, en el marco de una política de austeridad,

eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, durante los siguientes 10 años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional anualmente reglamentará mediante decreto un Plan de Austeridad del gasto para cada vigencia fiscal aplicable a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (...).

V. RELACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, "el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el congresista pueda encontrar".

Por otra parte, el artículo 286 de la Ley 5 de 1992 expresa lo siguiente:

Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

a) **Beneficio particular:** aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplina-rias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) **Beneficio actual:** aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) **Beneficio directo:** aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.

Parágrafo 1°. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los congresistas cuando por razones de conciencia se quieren apartar de la discusión y votación del proyecto.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de funciones judiciales, disciplinarias o fiscales de los congresistas, sobre conflicto de interés se aplicará la norma especial que rige ese tipo de investigación.

Parágrafo 3°. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para todos y cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5ª de 1992.

En tal sentido, no se evidencian circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del presente proyecto de Ley por parte de los congresistas, dada la delimitación de su objeto al ámbito ejecutivo y administrativo de las entidades señaladas.

VI. IMPACTO FISCAL

De conformidad al artículo 7 de la Ley 819 de 2003 "Análisis del impacto fiscal de las

normas" las iniciativas normativas que ordenen gasto u otorguen beneficios tributarios deben hacer explícito dicho gasto y la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

No obstante, la Corte Constitucional ha precisado en su jurisprudencia –a manera de ejemplo se aprecia la Sentencia C-502 de 2007- que el Análisis del Impacto Fiscal de las Normas se trata de un criterio de racionalización de la actividad legislativa lo cual no puede suponer un veto sobre la misma.

De igual manera, debemos señalar que los gastos que se generen de la presente iniciativa legislativa se deben entender como incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión al cual haya lugar.

Así las cosas, posterior a la promulgación del presente proyecto de Ley, el Gobierno Nacional deberá promover y realizar acciones tendientes a su ejercicio y cumplimiento, lo anterior con observancia de la regla y el marco fiscales de mediano plazo, como lo plasmó la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 490 del año 2011, en la cual señala a renglón seguido:

"El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático". (Subrayado fuera del texto, para resaltar idea)

De conformidad con lo anterior, y como lo ha resaltado la Corte Constitucional, el análisis del impacto fiscal de las iniciativas parlamentarias que se presenten no puede ser una

barrera para establecer disposiciones normativas que requieran gastos fiscales. Mencionando además que, si bien compete a los congresistas y a ambas cámaras del Congreso de la República la inexorable responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede ocasionarle al erario, es claro que es el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros de la Rama Legislativa la inviabilidad financiera del proyecto de Ley que en su momento se estudie, en este caso el que nos ocupa.

Es por ello que, el autor de esta iniciativa acompañará a ponentes a elevar la solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el posible impacto fiscal en el que pueda acarrear el presente Proyecto de Ley.

Por lo anterior, pongo a disposición del Honorable Congreso de la República, la discusión y aprobación del presente Proyecto de Ley.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Akerman, Y. (2022, septiembre 26). *Los perritos del fiscal Francisco Barbosa tienen escoltas y carro oficial*. W Radio. Recuperado agosto 23, 2024, de <https://www.wradio.com.co/2022/09/26/los-perritos-del-fiscal-francisco-barbosa-tienen-escoltas-y-carro-oficial/>

BanRep. (2024, marzo). *Boletín sobre deuda pública*. Recuperado Julio 17, 2024, de <https://www.banrep.gov.co/es/boletin-deuda-publica>

Bautista, J. A., & Sepúlveda Reyes, D. A. (2017, enero). Transparencia del Gasto Fiscal en Colombia. *Science of Human Action*, 2(1), 38 - 54. 10.21501/2500-669X.2321

Cámara de Representantes. (n.d.). *Proyecto de Ley 027/2021C - 046/2020S - Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones*. Cámara de Representantes. <https://www.camara.gov.co/inversion-social>

Charry, S. (2022, noviembre 25). *Francisco Barbosa pagó las empleadas del servicio de su casa con recursos públicos*. Cambio Colombia. Recuperado agosto 23, 2024, de <https://cambio colombia.com/articulo/poder/francisco-barbosa-pago-las-empleadas-del-servicio-de-su-casa-con-recursos-publicos>

DANE. (2022). *Ganancias y salarios laborales de la población ocupada. Enero – septiembre 2021-2019*. Recuperado Julio 17, 2024, de <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/presentacion-ganancias-salarios-laborales-poblacion-ocupada-enero-septiembre-2021-2019.pdf>

DANE. (2022, abril 26). *Pobreza monetaria. Resultados 2021*. Recuperado Julio 17, 2024, de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Presentacion-pobreza-monetaria_2021.pdf

DANE. (2024, junio 28). *Mercado laboral. Estadísticas oficiales. Empleo y desocupación*. Recuperado Julio 17, 2024, de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>

Méndez, M. (2024, mayo 4). *Con aumento salarial, congresistas ganan más que promedio de los altos ejecutivos*. La Republica.co. <https://www.larepublica.co/economia/con-aumento-salarial-congresistas-ganan-mas-que-el-promedio-de-gerentes-de-empresas-3853716>

MinHacienda. (2024a, marzo). *Comparativo de datos de austeridad del gasto por unidad ejecutora y categoría. Datos comparados (acumulados a 31 de diciembre) de las vigencias 2022 y 2023*. Presupuesto Público Nacional. Recuperado Julio 22, 2024, de https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_pgn

MinHacienda. (2024b, mayo 28). *Deuda Gobierno Nacional Central*. Recuperado Julio 17, 2024, de https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntidadesFinancieras/pages_Entidad esFinancieras/PoliticaFiscal/dgg/deudagobiernonacionalcentral

MinHacienda. (2024c, junio 30). *Presupuesto General de la Nación - PGN - 2000-2024*. Cifras Presupuestales Históricas. Recuperado Julio 23, 2024, de https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupues togralacion/bitcoraeconomica?_afLoop=1264723440464730&_afWindowMode=0&Adf-Window-Id=w10prwnrbyx&_afPage=1&_afFS=16&_afMT=screen&_afMFW=1920&_afMFH=94 5&_afMFDW=1920&_af

Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. (2023). *Informe #46 Noviembre de 2023. ¿Cuánto devengan los funcionarios públicos de la Nación?* https://www.ofiscal.org/_files/ugd/d0c5ee_cf84ce9477943e4b4a151e80a3c093.pdf

Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024). *Informe #51 Mayo de 2024. Informe sobre la remuneración del empleo público en Colombia*. Recuperado Julio 22, 2024, de https://www.ofiscal.org/_files/ugd/d0c5ee_f35d84b9b06348179efc6e495c58bcbf.pdf

OECD. (2010). *Mejores prácticas para la transparencia presupuestaria*. <https://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm>

OECD. (2014). *La transparencia presupuestaria*. In *Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2014: Innovación en la gestión financiera pública* (pp. 84 - 85). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264211636-26-es>.

OECD. (2022). *Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/04bf9377-en>

OECD, European Commission, & CAF Development Bank of Latin America and Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2022). *Perspectivas económicas de América Latina 2022. Hacia una transición verde y justa*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f2f0c189-es>.

Oliva, N., & Serrano, A. (2023, abril 11). *Austeridad Republicana y ampliación de políticas sociales en México. (Análisis presupuestario a 4 años de AMLO)*. — CELAG. CELAG. Recuperado agosto 23, 2024, de <https://www.celag.org/austeridad-republicana-y-ampliacion-de-politicas-sociales-en-mexico-analisis-presupuestario-a-4-anos-de-amlo/>

Leyes y marcos normativos referenciados

- Ley 2155 de 2021. Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones. Diario oficial no. 51.797 de 14 de septiembre de 2021. Consultado en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2155_2021.html
- Ley 2277 de 2022. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones. Diario oficial no. 52.247 de 13 de diciembre de 2022. Consultado en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2277_2022.html
- Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 49.084 de 6 de marzo de 2014. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html

- Ley 4 de 1992. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. Diario Oficial No. 40.451, de 18 de mayo de 1992. Consultado en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0004_1992.html
- Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Consultado en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893>
- Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Consultado en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866>
- Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. Consultado en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80915>
- Decreto Salariales 303 de 2024. Por el cual se fijan las escalas de viáticos. Consultado en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=2345 51
- Decreto 199 de 2024. Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Consultado en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=232990#:~:text=El%20presente%20decreto%20tiene%20por,la%20vigencia%20fiscal%20del%202024>
- Decreto número 0550 de 2024. Por el cual se reajusta la asignación mensual para los miembros del congreso de la república para el año 2024. Consultado en <https://img.lalr.com/cms/2024/05/03085542/decreto-0550-de-2-de-mayo-de-2024.pdf>
- Defensoría del Pueblo. Resolución No. 1159 de 09 de junio de 2023 "Por la cual se establece la escala para el reconocimiento y pago de viáticos de los servidores públicos y gastos de desplazamiento de los contratistas de la Defensoría del Pueblo". Disponible en <https://www.defensoria.gov.co/resoluciones>
- Gobernación departamental de Antioquia, a través del Decreto de 20 de noviembre de 2023 "Por el cual se fija las escalas de viáticos y se establecen otras disposiciones para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Departamento de Antioquia y sus entidades descentralizadas". Consultado en

https://compilacionjuridica.antioquia.gov.co/compilacion/compilacion/docs/d_gobant_2023070005126_2023.htm

Cuadros y gráficas

- Cuadro 1. Deuda neta del Sector Público No Financiero (SPNF)
- Cuadro 2. Distribución porcentual de los ocupados por dominio geográfico según rangos de ingresos por ganancias y salarios laborales
Enero - septiembre (2019-2021)
- Cuadro 3. Proyecciones de ahorro Exposición de Motivos Ley 2155 de 2021
- Cuadro 4. Ahorro del gasto público producto del decreto de austeridad en el año 2020.
- Cuadro 5. Ahorro del gasto público producto del decreto de austeridad en el año 2023
- Cuadro 6. Proyección de Ahorro del gasto público para 2025
- Cuadro 7. PGN 2024 Principales cuentas del gasto (Datos en miles de millones de pesos)
- Cuadro 8. Aproporaciones Presupuesto General de la Nación-PGN- 2000 - 2018 discriminado por concepto

- Gráfica 1. Ratio deuda pública bruta/impuestos en algunos países de América Latina
- Gráfica 2. Resultados en 4 años de la Política de Austeridad Republicana en México.
- Gráfica 3. Salario mensual de congresistas en dólares para el año 2024

VIII. PROYECTO DE LEY

“Por medio del cual se crea la Política de Austeridad Pública, se establece la obligatoriedad de los Planes de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y se definen lineamientos para promover y priorizar la transparencia del gasto público”.

El Congreso de la República decreta

ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto crear la Política de Austeridad Pública y establecer la obligatoriedad de los *Planes Anuales de Austeridad del Gasto* que trata el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, elevando sus disposiciones a rango de ley, con el fin de determinar los lineamientos y prohibiciones relativas a los gastos de funcionamiento del Estado; así mismo, genera unos lineamientos en materia de transparencia y publicidad de las actuaciones, respecto a estos gastos de funcionamiento. La presente ley regirá para todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

ARTÍCULO 2. Principios. Además de los definidos en la Constitución Política, el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se sustenta en los siguientes principios:

- **Austeridad:** Todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación enmarcados en lo establecido en la Constitución Política de Colombia tendrán un comportamiento de racionalidad, eficiencia y eficacia del gasto público, a partir de la transparencia están comprometidos con combatir la corrupción, el despilfarro y malgastar los recursos económicos del Estado.
- **Racionalidad:** Actuación por parte de las y los servidores públicos, funcionarios públicos y trabajadores del Estado acorde a una cultura de ahorro y en línea con los objetivos sociales de la política de Austeridad Pública.
- **Eficacia y Eficiencia:** La asignación de metas de ahorro y/o austeridad en el gasto público serán objeto a partir de optimizar el uso de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación garantizando el cumplimiento de los bienes y/o servicios con la misma o mejora de la calidad y oportunidad.
- **Anualidad:** El reporte del cumplimiento de la meta de la Política de Estado de Austeridad será de forma anual, pero tendrá seguimiento de forma semestral por

parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o quien haga sus veces determinado por el Gobierno Nacional.

- **Desarrollo sostenible e inclusivo.** La Política de Austeridad integrará acciones y estrategias orientadas en la austeridad del gasto en funcionamiento garantizando la sostenibilidad ambiental, económica, cultural y social a nivel local, regional y nacional.
- **Interés social:** La Política de Austeridad Pública y los Planes de Austeridad del Gasto representan un interés común de la sociedad con el fin de priorizar, optimizar y ahorrar recursos económicos para orientarlos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el cierre de brechas regionales y la reducción de la desigualdad económica y social.
- **Enfoque de derechos:** La Política de Austeridad Pública y los Planes de Austeridad del Gasto no afectarán de forma negativa los derechos fundamentales ni los derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población colombiana.
- **Responsabilidad social:** La Política de Austeridad Pública y la eficiencia en el gasto público versará sobre categorías relacionadas con Gastos de Funcionamiento que no generen afectaciones negativas a las condiciones de trabajo de servidores y funcionarios públicos. Así mismo, contarán con programas institucionales de cada entidad para la transición, en los casos que aplique, las nuevas acciones que se implementen para la austeridad del gasto público y cumplimiento de la presente ley.

Título I. Austeridad Pública como Política de Estado.

ARTÍCULO 3. Política de Austeridad Pública. Crease la Política de Austeridad Pública con el objeto de establecer acciones, estrategias y mecanismos para el desarrollo de medidas de austeridad en la planeación y ejecución del gasto público, así como de lineamientos para promover y priorizar la transparencia respecto de los gastos de funcionamiento del Estado. Esta política es aplicable a todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un término no superior de seis (6) meses a partir de la expedición de la presente Ley, reglamentará lo previsto en el presente artículo.

ARTÍCULO 4. Planes Anuales de Austeridad del Gasto. Todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación presentarán ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público su Plan Anual de Austeridad del Gasto en el último trimestre del año para la vigencia fiscal del siguiente año, cumpliendo los lineamientos definidos en la Política de Austeridad Pública.

La entidad cabeza de sector liderará la realización y presentación de los Planes Anuales de Austeridad del Gasto con el propósito de presentar, de forma global como sector, un ahorro de al menos el 5 % del gasto en funcionamiento, tanto en gasto de personal como adquisición de bienes y servicios en las categorías descritas en el artículo 5, o aquellas en que la entidad prevea que puede optimizar, siempre y cuando no represente un incumplimiento a los principios del artículo 2 de la presente ley.

ARTÍCULO 5. Categorías de funcionamiento sobre las que recaen las medidas de austeridad. Las categorías de funcionamiento sobre las que versará el ahorro serán las siguientes:

1. Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles
2. Arrendamiento de bienes inmuebles
3. Consumo de energía
4. Consumo de agua
5. Papelería y telefonía
6. Contratación de personal para la prestación de servicios y apoyo a la gestión
7. Comisiones de estudio y servicios
8. Horas extras y vacaciones
9. Suministro de tiquetes
10. Reconocimiento de viáticos
11. Esquemas de seguridad
12. Servicio de seguridad y vigilancia
13. Vehículos oficiales
14. Ahorro en publicidad estatal
15. Regalos corporativos
16. Eventos
17. Condecoraciones
18. Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos

ARTÍCULO 6. Meta Nacional de Austeridad. El Gobierno Nacional deberá reflejar en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación radicado ante el Congreso de la República

<p>una reducción del gasto público en las categorías de austeridad de los Gastos de Funcionamiento enunciadas en el artículo 2 de la presente ley, o según actualización que realice el Gobierno Nacional, en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %) anual.</p> <p>Durante el debate congresional del Presupuesto General de la Nación se podrán modificar estos valores sujetos a una justificación acorde a Metas del Plan Nacional de Desarrollo, del Marco Fiscal de Mediano Plazo y del Marco de Gasto de Mediano Plazo.</p> <p>ARTÍCULO 7. Reporte semestral. De conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 2155, el reporte sobre el ahorro generado por los Planes Anuales de Austeridad del Gasto será presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que será el encargado de su compilación y publicación, así como de la fijación anual de las metas de austeridad para la siguiente vigencia y del seguimiento para su cumplimiento efectivo.</p> <p>El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentará, junto al informe de ejecución presupuestal, el informe de cumplimiento de la meta de austeridad de la vigencia fiscal correspondiente.</p> <p>Parágrafo 1: El reporte del ahorro del gasto público o austeridad de cada una de las entidades será público, de libre acceso y en los formatos adecuados de lectura y análisis para la ciudadanía, tanto a nivel de cada entidad del orden nacional en sus respectivas páginas institucionales, como de forma compilada en el portal institucional que designe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>ARTÍCULO 8. Seguimiento y evaluación. El reporte global sobre el ahorro generado por las medidas de austeridad será presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a una comisión accidental con un integrante de cada comisión constitucional de cada una de las respectivas cámaras, la cual deberá estudiar y aprobar una semana antes de la aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación.</p> <p>En dado caso que el reporte nacional de austeridad no sea aprobado, la comisión accidental devolverá el reporte indicando los aspectos por los cuales no es aprobado, y podrán designar una sesión posterior, la cual no podrá exceder la fecha de aprobación del Presupuesto General de la Nación en las plenarias de las respectivas cámaras.</p> <p>Parágrafo 1: La comisión accidental deberá estar conformada por el 50 % de mujeres, y por al menos uno o una congresista en representación de pueblos étnicos.</p> <p>Parágrafo 2: La comisión accidental podrá emitir recomendaciones de medidas de austeridad para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los</p>	<p>cuales no son de carácter obligatorio para las entidades, pero en caso de no ser acogidas, deberán devolver a la comisión accidental la razón por la cual las medidas recomendadas no fueron acogidas. Las recomendaciones que emita la comisión accidental deben cumplir con los principios definidos en el artículo 2 de la presente ley.</p> <p>Título II. Medidas de austeridad en los Planes Anuales de Austeridad del Gasto</p> <p>ARTÍCULO 9. Salarios y remuneraciones. Ningún funcionario de la rama ejecutiva nombrado por el o la presidenta de la República de Colombia devengará un ingreso mensual global entre el salario oficial, comisiones, juntas, viáticos u otro tipo de ingreso, superior al salario oficial del o la Presidenta de la República de Colombia.</p> <p>Los servidores y funcionarios públicos devengarán una remuneración adecuada y proporcional a sus funciones y responsabilidades, y queda prohibida la recepción de algún tipo de privilegio económico o de otro tipo adicional a lo que establece la reglamentación del Ministerio Público.</p> <p>ARTÍCULO 10. Mantenimiento de bienes Inmuebles, cambio de sedes y adquisición de bienes muebles. Todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán acatar las siguientes directrices para el mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sedes o adquisición de bienes muebles:</p> <p>a. El mantenimiento de bienes inmuebles, de propiedad de las entidades del Estado, sólo procederá cuando se realice de manera preventiva y para garantizar su correcto funcionamiento, a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo.</p> <p>La necesidad del mantenimiento y las reparaciones se entienden cuando -de no realizarse- el funcionamiento de los bienes inmuebles pongan en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas. En estos casos, deben quedar, expresas, la constancia y la justificación de la situación que motiva los arreglos.</p> <p>b. El cambio de sede únicamente procederá en uno de los siguientes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Cuando exista necesidad inaplazable de construcción o adquisición de la sede, por condiciones de la infraestructura. ii) Cuando el inmueble en el que funcione la entidad tenga un contrato de arrendamiento, y exista la posibilidad de operar en otro inmueble de propiedad del Estado o bajo la figura de comodato.
<p>iii) Cuando el edificio donde funciona la entidad, ponga en riesgo la seguridad del personal o no brinde las condiciones laborales adecuadas, de conformidad con las normas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST.</p> <p>c. La adquisición de nuevos bienes muebles para la operación y/o uso de las entidades públicas, sólo se podrá efectuar cuando sean necesarios para el cumplimiento del objeto misional de las entidades, previa justificación.</p> <p>PARÁGRAFO. Las entidades deberán abstenerse de iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles, o para efectos de la decoración de los mismos.</p> <p>ARTÍCULO 11. Prelación de encuentros virtuales para reuniones y encuentros de carácter organizacional. Las entidades deberán promover y priorizar los encuentros virtuales entre funcionarios ubicados en distintos municipios/departamentos del país, sobre los presenciales, cuando las actividades correspondan a reuniones de planeación, coordinación institucional y otras de carácter interno.</p> <p>ARTÍCULO 12. Suministro de Tiquetes. Los viajes aéreos nacionales de todos los servidores públicos de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, independientemente de su nivel jerárquico, deberán hacerse en clase económica o en la tarifa que no supere el costo de ésta, y tendrá prevalencia la aerolínea pública del país, en caso de existir y/o tener rutas para el destino. Se prohíbe expresamente el uso de tiquetes en clase ejecutiva para desplazamientos aéreos dentro del país.</p> <p>Los Ministros del Despacho, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, los Presidentes de las Altas Cortes, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Defensor del Pueblo y, eventualmente los Viceministros del Despacho, los Directores y Subdirectores de los Departamentos Administrativos, los miembros del Congreso, los Embajadores, los Magistrados de las Altas Cortes, los Superintendentes, los Ministros Consejeros, los Secretarios y los Consejeros Presidenciales de la Presidencia de la República, el Presidente de Ecopetrol S.A., el Alto Comisionado para la Paz, el Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (antes Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas), y los Embajadores y Embajadores en Misiones Especiales, únicamente podrán realizar desplazamientos en clase ejecutiva en vuelos internacionales, en el evento en el que, respecto a países con más de 8 horas de distancia de vuelo, la primera actividad programada</p>	<p>en su agenda tenga una diferencia menor a 12 horas con relación a la hora prevista de llegada.</p> <p>ARTÍCULO 13. Fijación de la escala de viáticos. El Gobierno Nacional deberá aplicar el siguiente parámetro para la fijación de los topes de viáticos correspondientes a comisiones de servicio realizadas por funcionarios públicos al interior y exterior del país:</p> <p>El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas remitirá al Gobierno Nacional dentro de los 15 primeros días de cada año un informe en el que agrupe ciudades y regiones, a nivel nacional e Internacional, y presentará al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Función Pública una tabla única de referencias de la estimación de los valores que cubran con suficiencia los gastos en los que incurran los servidores públicos que se desplazan a los mismos.</p> <p>ARTÍCULO 14. Delegaciones oficiales. En los casos de delegaciones oficiales, las entidades de orden nacional, territorial, descentralizadas y centralizadas deberán conferir comisión de servicios a una (1) persona por cada entidad, salvo que se acredite la necesidad de contar con un mayor número de servidores para integrar la misma, lo que deberá soportarse en debida forma y de manera oportuna, proporcionando, entre otras, dentro de la respectiva justificación, la relación de las funciones del empleo que desempeña cada delegado, con el objeto de la delegación.</p> <p>Toda comisión de servicios otorgada a servidores públicos de todas las entidades públicas nacionales, territoriales, descentralizadas y centralizadas, para cumplir compromisos en representación del Gobierno colombiano con organismos o entidades internacionales de las cuales Colombia haga parte, deberá comunicarse previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en aras de descartar que la misma no pueda ser asumida por el servicio exterior presente en el país.</p> <p>ARTÍCULO 15. Prohibición de pago de viáticos y delegaciones oficiales a particulares. Se prohíbe a las entidades públicas contempladas en el objeto de la presente ley, asignar recursos propios o incluir en delegaciones oficiales a particulares. Sólo serán objeto de pago de viáticos y susceptibles de delegaciones oficiales los servidores públicos, contratistas y particulares en funciones administrativas de que trata el artículo 210 de la Constitución Política de Colombia.</p> <p>ARTÍCULO 16. Eventos. En los eventos oficiales de las entidades públicas nacionales, territoriales, descentralizadas y centralizadas, se deberá</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo.

<p>b) Cuando, excepcionalmente, el evento sea presencial, se deberá dar prioridad al uso de espacios institucionales.</p> <p>c) Coordinar su realización y logística, en la medida de lo posible, con otras entidades del Estado que tengan necesidades de capacitación análogas o similares.</p> <p>d) Priorizar el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones de manera que se racionalice la papelería y demás elementos de apoyo de las capacitaciones.</p> <p>e) Se prohíbe que, con cargo al presupuesto de la Entidad Pública, se realicen fiestas, conmemoraciones, condecoraciones o recepciones en las que se incluya el servicio o suministro de alimentos distintos a los establecidos en los servicios de cafetería.</p> <p>ARTÍCULO 17. Esquemas de seguridad. La Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, con acatamiento al marco legal y reglamentario, deberán efectuar una revisión de las evaluaciones de riesgo de los servidores públicos de todas las entidades públicas nacionales, territoriales, descentralizadas y centralizadas, y garantizar que su asignación y conformación responda siempre su nivel riesgo efectivo y no al cargo que ostenta.</p> <p>ARTÍCULO 18. Vehículos oficiales. Todas las entidades públicas nacionales, territoriales, descentralizadas y centralizadas, podrán adquirir vehículos automotores, cuando el parque automotor presente una obsolescencia mayor a diez (10) años, contados a partir de la matrícula del vehículo, y solamente cuando su necesidad esté debidamente justificada y sustentada en estudios que demuestren la conveniencia y el ahorro para la entidad.</p> <p>Los vehículos oficiales o los contratados mediante convenios suscritos con empresas autorizadas, tendrán como destinación específica el desarrollo de actividades misionales, quedando prohibida su destinación para el uso privado de sus asignatarios o de sus relacionados.</p> <p>ARTÍCULO 19. Ahorro en publicidad estatal. En concordancia con lo dispuesto en la Ley 2345 de 2023, el gasto total en publicidad oficial de los entes públicos no podrá ser superior al efectivamente ejecutado en la vigencia inmediatamente anterior a la promulgación de la presente ley, una vez actualizados sus valores.</p> <p>PARÁGRAFO: Se exceptúan de esta disposición los gastos relacionados con campañas de difusión masiva de información relacionada con el orden público y la seguridad nacional, o cualquier escenario de emergencia o calamidad manifiesta.</p> <p>ARTÍCULO 20. Papelería y telefonía. Para el uso adecuado de papelería y telefonía, todas las entidades públicas nacionales, territoriales, descentralizadas y centralizadas deberán:</p>	<p>a) Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones en papel.</p> <p>b) Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse de manera preferente en su espacio web.</p> <p>c) Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina.</p> <p>d) Racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y privilegiar sistemas basados en protocolo de Internet.</p> <p>e) Los planes de telefonía celular que adquieran las entidades, tendrán destinación exclusiva para su uso por parte de las áreas de servicio al ciudadano y/o aquellas en las que se requiera comunicación permanente con la ciudadanía y con agentes externos a la entidad. Los altos cargos de las entidades (Congresistas, Magistrados y directivos de entidades públicas) no recibirán equipos de telefonía celular ni recursos para el pago de planes de telefonía celular para uso personal o asignados a sus despachos.</p> <p>f) Los nuevos equipos de teléfono celular que adquieran las entidades no podrán superar el valor de compra de 50 Unidades de Valor Tributario.</p> <p>PARÁGRAFO: Se exceptúan de este precepto los servicios de telefonía destinados a servicios de atención al ciudadano, seguridad y actividades funcionales de inteligencia y contrainteligencia.</p> <p>ARTÍCULO 21. Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos. Las suscripciones a bases de datos electrónicas, periódicos o revistas especializadas se efectuarán solamente cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto misional de las entidades. Las licencias se adquirirán en las cantidades suficientes para suplir las necesidades del servicio.</p> <p>ARTÍCULO 22. Prohibición de regalos, recordatorios y souvenirs a cargo del tesoro. Se prohíbe a las entidades públicas objeto de la presente ley adquirir regalos corporativos, souvenirs, recuerdos o artículos suntuarios relacionados. No se financiarán con recursos públicos regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo por parte de ninguna de las entidades públicas nacionales, territoriales, descentralizadas y centralizadas.</p> <p>PARÁGRAFO: Exceptúense de esta disposición las entidades públicas cuyo objeto sea, puntualmente, la promoción y difusión nacional o internacional de artículos artesanales o culturales producidos en el país. De igual manera, se exceptúa de esta disposición la adquisición de artículos destinados a la promoción de la marca país en eventos o convenciones sobre turismo, ruedas de inversión y certámenes de importancia estratégica demostrable, y entidades a cargo de actividades protocolarias y de relaciones exteriores y cooperación internacional.</p>
<p>ARTÍCULO 23. Sostenibilidad ambiental. Todas las entidades públicas nacionales, territoriales, descentralizadas y centralizadas, propenderán por adoptar las siguientes acciones:</p> <p>a) Implementar sistemas de reutilización de aguas e instalación de ahorradores.</p> <p>b) Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad, a través del establecimiento de programas pedagógicos.</p> <p>c) Instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores, paneles solares y/o sistemas de autogeneración de energía y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.</p> <p>d) Implementar políticas de reutilización y reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.</p> <p>e) Crear programas internos de incentivo al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros.</p> <p>ARTÍCULO 24. Ningún servidor o funcionario público de la rama ejecutiva podrá obtener pensión ni recibir recursos públicos en objeto a jubilación sin el cumplimiento de la edad estipulada para acceder a una pensión de vejez que determine el marco normativo colombiano.</p> <p>ARTÍCULO 25. Prohibición de duplicidad de estudios. Salvo criterio técnico, suscrito por autoridad competente, que demuestre la inconveniencia, imposibilidad de ejecución o error manifiesto en su elaboración, se prohíbe a las entidades objeto de la presente ley la contratación de estudios y/o diseños de asuntos sobre los que existan otros estudios con idéntico o similar objeto y que sus resultados y/o recomendaciones sean vigentes. En todo caso, y con el fin de racionalizar el gasto público, se dará prelación a la actualización o complementación de los estudios y/o diseños existentes sobre la materia, antes que a la contratación de nuevos.</p> <p>Título III. Lineamientos para promover y priorizar la transparencia del gasto público</p> <p>ARTÍCULO 25. Publicación de informes de comisión realizados por los servidores públicos. Los informes de comisión presentados por los servidores públicos deberán ser publicados en las páginas web de cada entidad, y los mismos deberán consistir, al menos, en una bitácora de las actividades desarrolladas durante la comisión, desde el momento en el que inicia el primer desplazamiento y hasta el momento en el que regresa a su ciudad de origen, incluyendo tiempos de traslado y objetivos de la comisión asignada.</p> <p>ARTÍCULO 26. Plan de manejo y disposición de activos inútiles. Las entidades objeto de la presente ley, en un término máximo de 18 meses contados a partir de su entrada en</p>	<p>vigencia, presentarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Entidad cabeza de sector, un plan de manejo y disposición de aquellos bienes, muebles o inmuebles, participaciones accionarias o activos de cualquier naturaleza, cuyo estado actual imposibilita su uso, o el mismo no corresponde a la naturaleza y misión legal de la entidad.</p> <p>Dicho Plan de Manejo y Disposición deberá contar con un inventario de los activos considerados inútiles, una propuesta de destinación acorde a su naturaleza, función, estado y valor, y un plazo razonable para la concreción de tal propuesta.</p> <p>Los recursos generados por el desarrollo del plan de manejo y disposición de los activos inútiles, serán administrados por la entidad a cargo de los mismos y su valor será contabilizado como ahorro en la vigencia en que se efectúe su disposición.</p> <p>ARTÍCULO 28. Los servidores y/o funcionarios públicos de todas las ramas del poder público deberán brindar un trato respetuoso a las y los trabajadores que estén bajo su dirección. Así mismo, las funciones y responsabilidades que desempeñan las y los trabajadores que estén bajo su dirección sólo se podrán realizar dentro de las instalaciones de la entidad y/o jornadas de trabajo que designe la entidad en caso de ser realizada en espacios públicos, abiertos o por fuera de las instalaciones oficiales, en los horarios establecidos en el contrato de trabajo escrito y en ningún caso se permitirá el desarrollo de funciones remuneradas con recursos públicos para el beneficio individual, familiar o propio de su director, revisor y/o otro cargo superior.</p> <p>ARTÍCULO 29. Cajas menores. En las entidades y organismos en que esté contemplada la figura de la caja menor, su responsable deberá limitarse estrictamente a gastos imprevisibles, urgentes, imprescindibles e inaplazables. En ningún caso su destinación se podrá fraccionar a compras de un mismo elemento y/o servicio, ni a la adquisición de elementos cuya existencia esté comprobada en almacén o se encuentre contratada.</p> <p>ARTÍCULO 30. Todos los fondos y fideicomisos que reciban recursos del Presupuesto General de la Nación, sin excepción deberán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ser constituidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como único fideicomitente. - Ofrecer información cada trimestre en forma oportuna y veraz, con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, y observar el principio de rendición de cuentas, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, en el marco de recursos recibidos, ejecución, cumplimiento del objeto o misión del fondo y/o fideicomiso - Publicar trimestralmente sus estados financieros

- Reportar la información que le requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el Congreso de la República, tanto para la realización del Reporte de Austeridad como la función congresional de control político.

ARTÍCULO 31. Sistema de información sobre Fondos y Fideicomisos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá disponible un sistema de información sobre los fondos y fideicomisos de forma clara y de libre consulta en la página web institucional sobre los ítems planteados en el artículo 29 de la presente ley.

Las autoridades competentes en materia de control fiscal realizarán auditorías e inspecciones a los fondos y fideicomisos que manejen o administren recursos públicos.

ARTÍCULO 32. Programa Global de revisión de programas de gastos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación entregarán a más tarde seis meses después de la sanción de la presente ley un programa global de revisión de programas de gastos y tendrá hasta 6 meses más para su ejecución.

El resultado de estas evaluaciones deberá ser presentado en los debates de la ley de presupuesto inmediatamente siguiente e incorporado en el Presupuesto orientado a Resultados para la asignación de recursos a los diferentes sectores y entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación

ARTÍCULO 33. Toda organización pública, privada o mixta que reciba recursos públicos aplicarán acciones de transparencia de la información y ejecución de los recursos, incluyendo el levantamiento del velo corporativo. Cada organización determinará internamente el mecanismo de presentación de informes de cumplimiento y/o ejecución, así como de sus reportes financieros, con el fin que permita al Congreso de la República y a los entes de control hacer seguimiento del uso eficiente, racional y austero de los recursos públicos.

ARTÍCULO 34. Destinación del ahorro producto de la Política de Austeridad Pública. Los recursos ahorrados producto de la Política de Austeridad Pública podrán ser orientados a funcionamiento o inversión, pero no al pago de la deuda pública. El objeto de la austeridad es la eficiencia y eficacia en la planeación y ejecución del gasto público con fines de ser redistribuidos a otros rubros para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el cierre de brechas regionales y la reducción de la desigualdad económica y social.

ARTÍCULO 35. Impacto fiscal. Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley deben sujetarse a las disponibilidades existentes tanto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo, de los sectores responsables de su cumplimiento.

ARTÍCULO 36. Vigilancia y control. Al interior de las entidades, la función de seguimiento y evaluación a los Planes de Austeridad del Gasto estará encargada a las oficinas de Control Interno en concordancia con las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993. De igual manera, la Contraloría General de la República será competente en lo relativo al seguimiento global de los Planes de Austeridad de que trata la presente dentro del marco de las competencias asignadas en los artículos 267 y ss. de la Constitución.

ARTÍCULO 37. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.


 David Racero Mayorca
 Representante a la Cámara por Bogotá
 Coalición de Pacto Histórico

CAMARA DE REPRESENTANTES SECRETARÍA GENERAL

El día 27 de agosto del año 2024
 Ha sido presentado en este despacho el
 Proyecto de Ley 238 Acto Legislativo _____
 No. _____ Con su correspondiente
 Exposición de Motivos, suscrito Por: HA David
Racero


 SECRETARIO GENERAL

PROYECTO DE LEY NÚMERO 246 DE 2024 CÁMARA

por medio del cual se impulsa la política de localización empresarial para el desarrollo regional y se dictan otras disposiciones.

<p>Bogotá, DC, agosto de 2024</p> <p>Doctor, JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA Secretario General Cámara de Representantes República de Colombia</p> <p style="text-align: right;">Asunto: Radicación proyecto de Ley</p> <p>Respetado señor secretario de esta corporación,</p> <p>Con fundamento en el artículo 150 y 151 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 139 y 140 de la Ley 5ta de 1992, así como del artículo 147 de la Ley 5ta de 1992 en materia de requisitos constitucionales para la presentación de iniciativas legislativas por parte de los congresistas de la República de Colombia, presento ante su honrosa dependencia el presente PROYECTO DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE IMPULSA LA POLÍTICA DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>INGRID MARLEN SOGAMOSO ALFONSO Representante a la cámara Autora</p>	<p style="text-align: center;">PROYECTO DE LEY No _____ POR MEDIO DEL CUAL SE IMPULSA LA POLÍTICA DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES</p> <p style="text-align: center;">EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA</p> <p>Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto impulsar la producción, el empleo, la inversión y el crecimiento económico en los territorios a través de mecanismos de estímulo a la localización de empresas, promoviendo la competitividad, diversificación productiva, especialización y reconstrucción del tejido empresarial en el territorio nacional.</p> <p>Artículo 2°. Definiciones. Localización empresarial. Ubicación espacial donde se desarrollan actividades de producción, transformación, creación y venta de bienes y servicios en cualquier ramo, por medio de unidades productivas que se complementan entre si y que funcionan como una aglomeración. Habilitadores para la localización. Conjunto de políticas públicas, investigación académica, desarrollos tecnológicos, acciones institucionales, transferencia tecnológica, creación de valor, entre otras acciones de tipo innovador que propenden por la potencialización de uno o varios sectores económicos alrededor de una industria particular y que dadas sus características utilizan mano de obra, recursos, y demás servicios complementarios disponibles en un espacio determinado. Planes de Localización empresarial. Documento técnico de identificación de factores potenciales y uso de indicadores para determinar las mejores condiciones de competitividad en una zona geográfica o espacio productivo definido, que contiene la información necesaria para desarrollar niveles apropiados de localización a través de la transformación de territorio con base en la sostenibilidad,</p>
<p>el uso adecuado de los recursos naturales, humanos, tecnológicos entre otros, y una baja presencia de externalidades negativas.</p> <p>Artículo 3°. Especialización territorial. En los departamentos y municipios se deberán actualizar las condiciones que permiten establecer el grado de especialización territorial con base en las industrias o actividades económicas de mayor presencia en cualquier de los sectores económicos que prevalecen en su territorio, para ello, una vez presentados los resultados del censo económico nacional se deberán implementar las primeras actualizaciones de información que caractericen la estructura productiva, diferenciando cada industria y/o empresas en su objeto, la formación de capital físico, el grado de inversión, la capacidad operativa y de producción, la dotación de recursos, la caracterización del capital humano y demográfico, el nivel de intensidad productiva entre otros.</p> <p>Parágrafo 1. El gobierno nacional coordinará la implementación del modelo de especialización territorial y constituirá una serie de documentos marco para la orientación y ejecución de acciones de especialización territorial que será entregado a los gobiernos locales en el territorio nacional.</p> <p>Parágrafo 2. Los municipios y departamentos a través de sus federaciones recomendarán al gobierno nacional la mejor forma de implementar estrategias de caracterización y actualización territorial en cuanto a su economía, así mismo se vinculará a las comisiones constitucionales competentes del Congreso de la República para el fomento del desarrollo territorial.</p> <p>Artículo 4°. Modifíquese el artículo 31 de la ley 152 de 1994 el cual quedará así: ARTÍCULO 31. CONTENIDO DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación establecidos en la presente Ley.</p>	<p>Sin perjuicio de su autonomía, las entidades territoriales presentarán un capítulo especial de desarrollo empresarial y localización que permita visualizar el diagnóstico general de su estructura económica.</p> <p>Las autoridades de las entidades territoriales indígenas definirán en los alcances y los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes, de acuerdo con sus usos y costumbres, atendiendo los principios generales de esta Ley y haciendo compatibles los tiempos de presentación y la articulación con los procesos presupuestales, de tal manera que se logre la coordinación y concertación de la planeación con las autoridades de las demás entidades territoriales y con la Nación.</p> <p>Artículo 5°. Innovación para el desarrollo. El gobierno nacional mejorará las condiciones de acceso de las entidades territoriales a la formación en capacidades tecnológicas e innovación por medio de programas de incentivo a la retención de talentos en su territorio que les permita desarrollar investigación, crear nuevo conocimiento y servir a las soluciones en materia de desarrollo y localización empresarial.</p> <p>Artículo 6°. Promoción de los Departamentos. Los alcaldes y gobernadores en coordinación con el gobierno nacional implementarán un plan de comunicaciones y publicidad que les permita mostrar su potencial económico, oportunidades y ventajas para emprender y atraer empresas, para ello se utilizarán los medios públicos de que dispone el país para divulgación, propaganda y promoción territorial. Se producirán contenidos que vinculen a los habitantes del departamento o municipio, empresarios, emprendedores y demás población que aporta al crecimiento y desarrollo económico territorial.</p> <p>Artículo 7°. Conforme a los niveles de asociatividad y concurrencia entre departamentos y municipios estos podrán desarrollar proyectos conjuntos que les permitan atraer empresas a sus territorios compartiendo ventajas y condiciones socioeconómicas y geográficas comunes entre si. Para ello, contarán con una oferta</p>

de programas de interés económico que el gobierno nacional definirá en un periodo no superior a 1 año sancionada esta ley.

Artículo 8°. El gobierno Nacional a través del presupuesto general de la nación presentará en la anualidad fiscal recursos re distribuidos hacia la formación de emprendedores y el apoyo directo a capital semilla que estará contenido en los presupuestos departamentales, quienes se encargarán de la divulgación de acceso a esos recursos y garantizarán la entrega y ejecución total del rubro, se accederá en condiciones de concurrencia, importancia y viabilidad del proyecto, en especial para grupos asociados que conformen una empresa. El departamento se comprometerá a aunar esfuerzos para crecer los recursos con su participación y para buscar fuentes de financiamiento adicionales que se sumen a la iniciativa para formar empresa.

Artículo 9°. Los gobernadores cada año convocarán a los alcaldes municipales para que junto con los gremios productivos presentes en el territorio y en coordinación con entidades de agremiaciones especializadas, estudien los retos, avances y proyectos necesarios para avanzar en el fortalecimiento de la empresa y la industria local, para ello, desarrollarán una red de conocimiento que les permita consolidar bases para la economía territorial con enfoque de diversificación. Las federaciones de municipios y departamentos tendrán una función primordial en el seguimiento de los objetivos trazados.

Artículo 10°. Fortalézcase la función de los institutos financieros de desarrollo territorial ubicados en los departamentos a través de mecanismos de participación productiva en asociación tanto con el sector público como privado para ampliar la oferta de financiamiento a procesos de consolidación empresarial del territorio. Los mismos deben mejorar constantemente sus capacidades de inserción del territorio en la actividad productiva, empresarial e industrial para impulsar proyectos locales.

Artículo 11°. Los gobernadores departamentales recuperarán aquella infraestructura inoficiosa, obsoleta o en desuso y pondrán en funcionamiento iniciativas de reconstrucción de estas, para actividades empresariales y/o industriales a partir de la participación del sector público y/o privado, para ello

diseñarán los mecanismos de oferta que permitan usar esa infraestructura y recuperar su función económica.

Artículo 12°. el sector empresarial impulsará programas y/o acciones e implementar mecanismos de desarrollo social en los departamentos y/o municipios de locación para mejorar las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, en especial en materia de capacitación, educación, formación para el trabajo entre otras, a su vez, los gobiernos locales prestarán toda la ayuda posible para que estos programas se lleven a cabo y participa activamente con el sector en aras de consolidar una economía sostenible.

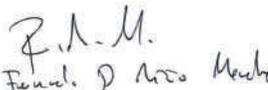
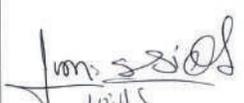
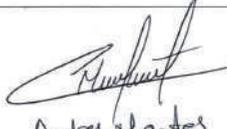
Artículo 13°. Fortalézcanse las condiciones institucionales para mejorar la autonomía de los departamentos y permitir el fortalecimiento de la descentralización proveyendo de mejores capacidades de administración los recursos de inversión productiva, fortalézcanse los presupuestos municipales en materia de financiamiento productivo y elimínense aquellos trámites que no favorecen la formación de empresa.

Artículo 14°. La superintendencia de sociedades fortalecerá su presencia en los territorios para lo cual contará con mejores herramientas que le permitan ampliar su función misional. Para ello el gobierno nacional fijará unas metas de fortalecimiento, mejora continua y cobertura.

Artículo 15°. Los espacios públicos como auditorios, teatros, salones para convenciones, auditorios entre otros de naturaleza, serán gratuitos para la presentación de ruedas de negocios, eventos empresariales, académicos, especializados, organizados por ciudadanos que busquen comunicar su proyecto, aportar a la formación de empresa y cualquier actividad que beneficie la realización de eventos empresariales o de conocimiento para el emprendimiento.

Artículo 16. Vigencia. La presente ley Rige a partir de su promulgación y deroga aquellas que le sean contrarias.

Cordialmente,

 INGRID MARLEN SOGAMOSO ALFONSO Representante a la cámara Autora	 Fernando D. Arco
 Willis	 Andres
 INGRID SOGAMOSO REPRESENTANTE	

El debate que se ha suscitado en torno a la posibilidad que tienen las regiones para superar las barreras de acceso a la constitución de unidades productivas, no solo se da desde el escenario de cuantificación de empresas registradas año a año, ni de aquellas que salen del mercado por motivos relacionados con la imposibilidad de sostener los costos asociados a su productividad económica, también persisten vacíos institucionales que limitan el desarrollo de clústeres productivos, acceso al financiamiento, acceso a información de calidad y sobre todo integralidad en políticas públicas que permitan la intervención de fallos para el desarrollo económico de las regiones.

El mensaje en cuanto al desarrollo del tejido empresarial a nivel regional se ha venido desdibujando por la multiplicidad de factores que acompañan los discursos acerca de los beneficios de consolidar ecosistemas empresariales que ayuden a la expansión de la competitividad a nivel regional, sin embargo, los esfuerzos por generar capacidades de interacción económica son insuficientes en cuanto a la identificación de los elementos constitutivos del aparato productivo regional.

Se ha dicho que como en las economías latinoamericanas, las regiones al interior del país no han logrado consolidar su estructura productiva por lo que los problemas en su matriz empresarial son caracterizadas por: baja concentración productiva, baja diversificación, bajo consumo energético y sobre todo bajas tasas de reinversión, lo que supone una mayor exposición al cierre de unidades productivas, afectando las finanzas públicas territoriales por un menor recaudo de la actividad económica, la generación de nuevo empleo, un mayor aporte al valor agregado, el aprovechamiento del capital humano entre otros, lo que restringe la dinámica económica regional.

Nuestros modelos empresariales de tipo regional son vulnerables frente a choques internos de la política económica y de los ciclos de la producción, con lo cual el tejido empresarial esta expuesto a la entrada y salida paulatina del mercado, máxime cuando desde los gobiernos locales no se impulsa la diversificación productiva en niveles macro, principalmente porque localizar industria y mantener empresas en región es una tarea que implica decisiones de inversión pública para fomentar el ecosistema empresarial.

No solo persisten problemas de diversificación productiva, sino que se suman elementos coyunturales como inseguridad, extorsión, contrabando que se pueden dar como choques exógenos que afectan directamente la consolidación de actividades productivas, a su vez, las condiciones tributarias no permiten que el recaudo a nivel territorial sea directamente proporcional con el crecimiento de su economía pues varias de las empresas o negocios funcionan desde la informalidad, lo que resta competitividad.

Grosso modo la presente iniciativa se enmarca en una problemática de vieja data que tiene que ver con el desarrollo regional jalonado por la empresa, lo que implica la localización de unidades productivas capaces de generar dinámicas económicas

que generen valor agregado a la economía local. De ahí que se profundice en la capacidad de los gobiernos para atraer esa localización a sus territorios. En adelante se expondrán cada uno de los motivos que justifican esta iniciativa parlamentaria.

1. CONTEXTO GENERAL DE LA ECONOMÍA REGIONAL

La economía regional ha derivado del estudio de los ciclos económicos nacionales a través de los agregados para identificar correlaciones de largo plazo en el comportamiento del PIB, además del efecto en el empleo, a su vez, los ciclos regionales se caracterizan por la reacción de la economía local ante cambios nacionales, comúnmente identificados mediante el uso de coeficientes de correlación muestral o de filtros estadísticos como el de Hodrick y Prescott. Los componentes cíclicos pueden corresponder a un ciclo en común o a la localización de las regiones; por ejemplo, la divergencia de impacto en las ciudades con relación al entorno nacional (Vásquez Bedoya , Restrepo Ochoa, Lopera Castaño , & Restrepo Estrada, 2014).

El ciclo económico no tiene una sola definición por lo que la mas usada es aquella por medio de la cual se entienden como un conjunto de fluctuaciones Inter temporales de la actividad económica que determinan procesos de contracción y expansión, luego, tienen efecto en distinto grado dada la combinación de política económica ya sea procíclica o contra cíclica.

A nivel regional, el estudio de los ciclos económicos se ha hecho para series de tiempo que analizan las variables del PIB, empleo, recaudo tributario e ingreso per cápita de tipo sectorial, de acuerdo con (Zucardi Huertas, 2002) "En el caso particular de las regiones, las diferencias en la estructura de su sistema productivo, el tamaño de sus mercados, el grado de integración interregional, pueden generar diferentes comportamientos en su ritmo de producción. De esta manera, la actividad económica de algunas regiones podría tener un alto grado de coordinación con la nacional, mientras que otras regiones pueden tener ciclos productivos menos relacionados con el del país" [...].

A su vez, las diferencias regionales también pueden ser explicadas por el comportamiento de las políticas públicas que interactúan de forma diferente con factores específicos de cada región, como, por ejemplo, su situación geográfica, los rasgos culturales, el capital humano entre otros. Uno de los casos mas explicados tiene que ver con la política monetaria y sus efectos a nivel regional.

Pari passu, los cambios en la economía regional explicados por la transmisión de la política publica se presentan de forma dispersa, es decir que su impacto es desigual no precisamente desde el bienestar generado sino desde la capacidad de transformación del territorio, además de la presencia de distintas visiones de los gobiernos locales sobre la planificación del desarrollo y la inclusión de programas de gobierno que cambian cada periodo similar al entorno nacional solo que desde

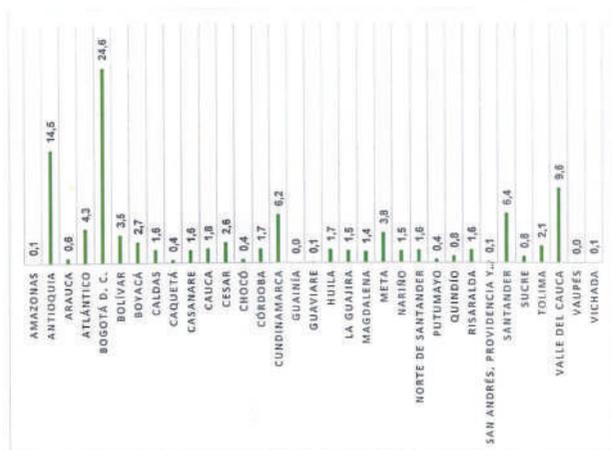
un componente micro hacia lo macro. Es decir, microcomponentes de ajuste nacional respecto de microcomponentes de ajuste local.

En cuanto a la identificación de ciclos económicos regionales, la complejidad de su medición está supeditada al comportamiento agregado nacional, sin embargo, la teoría ha expuesto la correlación como un resultado disímil entre regiones dada la diferencia de factores que inciden en su desarrollo. De ahí que, en el caso colombiano, los estudios realizados al respecto se han hecho para explicar ciclos de algunos departamentos en especial a partir de variables como el recaudo tributario y el empleo. No basta con referirse a las diferencias territoriales sino abarcar de forma amplia las dinámicas económicas que se generan en torno a una actividad en común dados los componentes de productividad y competitividad. Es importante recalcar en las escalas geográficas para el análisis: regiones, departamentos y municipios utilizados en estudios de convergencia regional.

A nivel nacional los resultados sobre análisis económico en cada una de las escalas geográficas demuestran una alta dispersión en las actividades económicas que difieren de la naturaleza productiva lo que crea barreras productivas al interior de los departamentos y limita la planificación del desarrollo de largo plazo lo que ha llevado a replantear la necesidad de otorgar mayores niveles de libertad en materia de descentralización ya que en lo posible aceleraría las posibilidades de inversión por parte de los gobiernos subnacionales.

Al hacer una primera aproximación al peso por departamento en el PIB nacional, se observa heterogeneidad en el comportamiento del indicador para el año 2022, de acuerdo con el grafico 1, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander aportan el 61,3% del PIB nacional.

Gráfico 1. Tasa de contribución departamental al PIB nacional 2022.



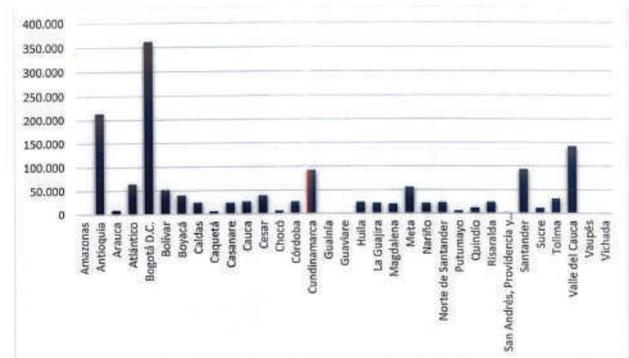
Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

El aporte de al PIB no se puede tratar solamente como un efecto del ciclo económico de forma aislada, sino como el conjunto de características dominantes al interior de cada departamento, por ejemplo, la extensión número de municipios que lo componen, zonas rurales, dispersión y composición demográfica, distancia de los centros industriales, entre otras que complejizan la justificación de los efectos cíclicos Inter temporales de la economía regional. De ahí que los niveles de desarrollo también difieran de la realidad socioeconómica que refleja las necesidades de la población en un periodo de tiempo dado.

En el caso del gráfico, apenas se observa la tasa de participación en el indicador de PIB, pero no se reflejan las demás variables que explicarían las diferencias entre unos y otros. Sin embargo, si se refleja la concentración del indicador y por ende se puede inferir que existen condiciones específicas en los Departamentos y ciudades dominantes que caracterizan el rezago relativo con otras áreas geográficas.

En cuanto al valor de la producción por departamento para el año 2022, el gráfico 2 muestra el tamaño del PIB a precios corrientes, donde Bogotá y Antioquia se alejan por más de \$100 billones, suman el 52% del PIB nacional. Bogotá aporta \$361 billones al PIB nacional.

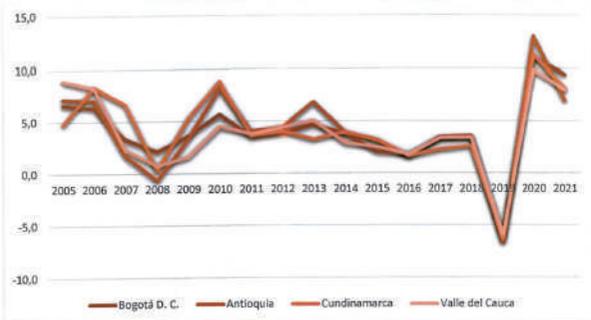
Gráfico 2. PIB a precios corrientes 2022.



Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

En cuanto a la serie de tasa de crecimiento del PIB departamental, la tendencia se comporta similar al ciclo nacional, lo cual también se explica por la correlación entre el agregado total y el local, siendo una aproximación al comportamiento cíclico de la economía, pues refiriéndose explícitamente al indicador ceteris paribus, se cumple que los eventos locales pueden ser explicados por el impacto nacional. Gráfico 3.

Gráfico 3. Tasa de crecimiento en volumen PIB por Departamento 2005-2021



Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

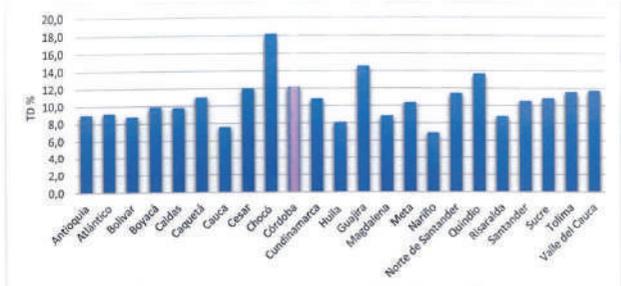
Al revisar la tasa de desocupación (TD) a nivel departamental, se observa que para 2023, Chocó registró el valor más alto para el indicador (18.2%), seguido de Guajira (14.5%), Quindío (13.7%), Córdoba (12.1%). Sin embargo, a nivel general, los 23 departamentos que incluye las GEIH mantienen tasas de desempleo de dos dígitos, excepto para los casos de Cauca, Huila, Boyacá y Nariño en el año 2023, esto no quiere decir que el desempleo se comporte igual para una serie anualizada de 10 años, por ejemplo.

Al igual que con la producción, es de esperar que el desempleo aumente significativamente ante ciclos económicos de recesión o desaceleración de la economía, también ante la composición productiva a nivel departamental y los efectos implícitos cuando se dan choques internos que afectan directamente la formación de nuevas empresas o apertura de nuevos negocios y la rotación en la economía de los departamentos, lo cual también genera dinámicas diferentes de participación laboral en la población, también debe tenerse en cuenta que el comportamiento de la variable puede cambiar ante asimetrías de información que traspasan fallos en el mercado laboral a nivel regional. Sin embargo, la Tasa de Desempleo es una variable fundamental en momentos en que se implementan políticas públicas que permitan mejorar el indicador de participación laboral.

Uno de los debates en torno al desempleo deriva de las discusiones de fuentes de generación junto con planes institucionales de formalización y apoyo al mercado laboral, lo cual a nivel local ha sido difícil de cumplir debido principalmente a que el tejido empresarial es frágil, el financiamiento es escaso o existen barreras de entrada

al mercado, con lo cual queda muy poco margen de apoyo al empleo, salvo la oferta de empleo de carácter público.

Gráfico 4. Tasa de Desocupación (TD) Departamental 2023

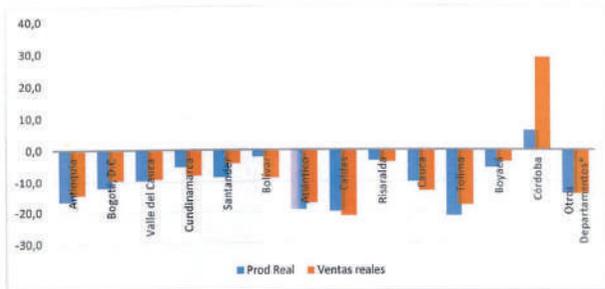


Fuente: elaboración propia con base en datos de la GEIH

Cuando analizamos los resultados de la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial, que nos permite identificar el comportamiento de la producción, ventas y empleo, los departamentos sobre los que se aplica la medición demuestran una condición negativa en el comportamiento de las actividades industriales localizadas allí, así las cosas, la variación anual salvo en el departamento de Córdoba, mostró valores negativos asociados a una ciclo económico de desaceleración que se presenta en el país con mayor profundidad desde el segundo trimestre del año 2023, caracterizado por la contracción de la actividad industrial y un bajo crecimiento económico del 0.6% para todo el año 2023, no obstante de los ajustes en 2024 que al primer trimestre mostraron un PIB con crecimiento del 0.7% y una expectativa anual del 1.1%.

Como se observa en el gráfico 5, tanto la producción como las ventas se encuentran en terreno negativo con un impacto en la generación de empleo del -1.9% lo cual demuestra la susceptibilidad de los Departamentos al riesgo de ceder en su estructura económica por un ciclo importante que proviene del entorno nacional, así pues, se constata que a nivel local las consecuencias de una reducción en la tasa de crecimiento de la economía tienen una incidencia mayor en los desequilibrios del empleo, la producción y el valor agregado.

Gráfico 5. Variación anual (marzo 2024/2023) de la producción Real y Ventas Reales por Departamento.



Fuente: EMM con enfoque territorial

Bajo estas circunstancias se entiende que, aunque las regiones no se afecten inmediatamente por el cambio de ciclos económicos a nivel nacional, si son impactadas por los desequilibrios que afectan la estabilidad macroeconómica a nivel agregado. Por lo tanto, están expuestas a la ocurrencia de ciclos en cualquier proporción siempre que no estén preparadas para absorber los cambios que traen. Por ejemplo, su alta dependencia a los recursos centralizados del gobierno nacional, las hace más vulnerables a los cambios y el impacto de decisiones de política pública.

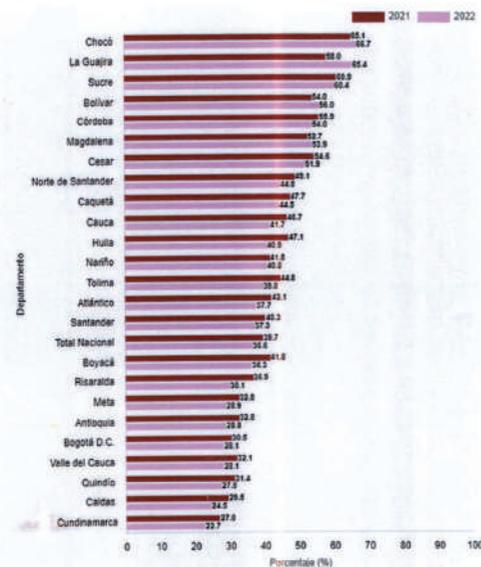
Además del escenario de la producción y el desempleo, se reconoce el impacto de la pobreza a nivel de los territorios y Departamentos que componen la geografía nacional, esto por cuanto es una de las formas en que se percibe la condición económica y social relativas a su nivel de desarrollo. Es en este escenario donde la política pública busca reducir el impacto de las desigualdades a nivel regional derivando así un sinnúmero de posibles soluciones a diferentes problemáticas.

La pobreza se ha percibido como una condición que recae con mayor intensidad en las poblaciones que carecen de oportunidades y libertades para elegir sobre su propio bienestar, así, siguiendo la tesis de Amartya Sen, la pobreza es un conjunto de barreras que juntas conforman la pérdida de libertad para definir el propio destino humano. Acceder a aquello para lo cual no existe oportunidad o aspirar a aquello en donde el costo es elevado, limita en una alta proporción y condiciona las expectativas humanas en el tiempo, casi condenando su destino.

En Colombia, la pobreza como indicador ha permitido expresar mejores visiones de política pública, como también visiones desde lo político expresado con base en las

inequidades y lo técnico con fundamento en los desequilibrios económicos que producen esta condición, así pues, lograr definir el camino expreso para cerrar ciclos brechas no depende de una u otra alternativa, sino de un conjunto de visiones constructivas.

Gráfico 6. Pobreza monetaria en Colombia 2021 – 2022



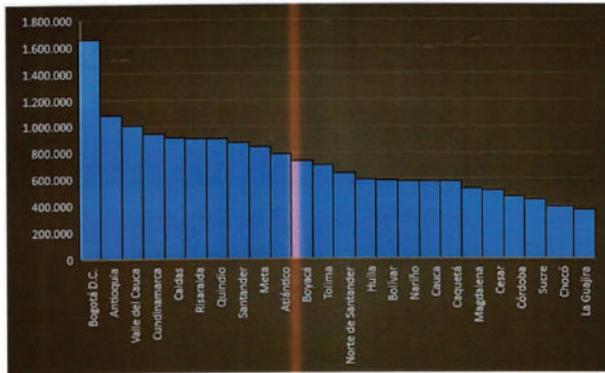
Fuente: Dane cifras de pobreza a 2022 (al momento no se ha actualizado)

De acuerdo con el gráfico 06, a nivel departamental existen amplias brechas de incidencia de la pobreza monetaria, entre ellas, citando a Cundinamarca con una tasa de pobreza del 22.7% de su población, frente al valor del indicador para Chocó con un 66.7% de su población en condición de pobreza monetaria, refleja una brecha de 44 puntos porcentuales. De ahí que una de las primeras aproximaciones a la diferencia regional empiece por el valor del indicador de pobreza que determina

la condición de precariedad en las oportunidades de sus habitantes para desarrollar una vida digna en términos comparativos.

Todos los departamentos a nivel nacional tienen una marcada incidencia de la pobreza monetaria pues el valor del indicador supera el 20% de la población y va hasta el 67%, lo que explica que coexisten además de una alta pobreza, una baja estructura de política pública eficiente en la reducción de estas brechas, sin embargo, cada departamento es autónomo de sus decisiones de política tanto a nivel social, como económico lo que les da garantías para desarrollar coherentemente sus territorios en función de las características, ya que no comportan igual condicionalidad departamentos ubicados al norte del país contra aquellos que están al centro o al sur, principalmente por la diferenciación demográfica que conforma su entorno social, cultural, religioso, ético entre otros.

Gráfico 7. Ingreso promedio per cápita de la Unidad de gasto 2022 (\$COP)



Fuente: Construcción propia a partir de datos de DANE.

En promedio a nivel nacional el ingreso per cápita mensual de la unidad de gasto se sitúa en \$919.151 a precios de 2022, con cifras publicadas por el Dane a noviembre del año 2023. Al revisar la diferencia de ingreso, se tiene que Bogotá, es la ciudad que mejores condiciones otorga a la población respecto del sustento mensual, mientras que Vichada es el Departamento con menores oportunidades en al menos \$700.000 por debajo, sin embargo, la diferencia de ingreso es explicada por el grado de desarrollo, población, localización demás dinámicas económicas y sociales que permiten esta diferencia. No obstante, en términos per cápita siempre

será deseable que la unidad de gasto perciba por lo menos el salario mínimo mensual vigente en un periodo determinado.

De acuerdo con (Galvis & Meisel, 2010) al estudiar las condiciones de pobreza de los municipios colombianos, se encontró que pueden caracterizarse por presentar una profunda incidencia, persistencia y resiliencia en el indicador, dada además una alta correlación entre las NBI y los datos censales analizados en el estudio para el periodo determinado. En dicho estudio, la periferia representa una condición de pobreza estructural que la mantiene en un círculo vicioso que les impide a estos municipios salir de tal condición. La política económica a su vez se caracteriza por desconocer los desequilibrios económicos y de oportunidades entre las regiones.

Según (Hahn-De-Castro & Meisel-Roca, 2018), las estimaciones de producción económica regional que permiten establecer diferencias se han dado a conocer a través del DANE para la serie que comprenden los años 1980-2016 con un consecuente cambio de años base que dividió las estimaciones en tres segmentos para los años 1975 – 1980 y 1995, antes de estas series quienes aportaban a sus estimaciones fueron algunos centros de investigación económica, en especial los estudios realizados por el CEGA (Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas) entre los años 1975 y 2000 para 24 departamentos, la Universidad Javeriana para el periodo 1970 -1990 y el DNP 1960 -1975. Antes de 1960 no se hicieron estimaciones de PIB regional.

En materia de desigualdades regionales, se ha planeado la necesidad de repensar la política económica regional a partir de la cobertura de vacíos institucionales que coexisten con los diferentes niveles de planificación, esto por supuesto exige una gran cantidad de investigación que ha llevado a implementar misiones de expertos en distintas áreas, por citar algunos ejemplos: la misión de expertos para la descentralización convocada por el DNP desde 2023 cuyo objetivo es: *elaborar los estudios técnicos e insumos en materia de descentralización que permitan evaluar el modelo actual y presentar iniciativas constitucionales y legislativas, para definir y ordenar la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales señaladas en el artículo 286 de la Constitución Política [...]*

Otra iniciativa que se enfoca en la tributación de las regiones ha sido la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial: *se conformó para analizar el conjunto de impuestos municipales y departamentales, y proponer reformas para fortalecer su eficiencia, reactivar la economía de las regiones, y combatir la evasión y la elusión fiscal [...]* que culminó con su informe final en el año 2020, conformada el 21 de junio del año 2019.

Así mismo la Comisión Legal Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República, creada mediante el artículo 63 de la Ley 5ta de 1992. La comisión de ordenamiento territorial creada por el **DECRETO 3680 DE 2011** como organismo de carácter técnico asesor, que tiene como función evaluar, revisar y sugerir al Gobierno

Nacional y a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

En sentido, para (Banco de la República, 2007) las disparidades regionales desde el punto de vista microeconómico se explican en dos sentidos: en primer lugar, el mérito al esfuerzo por conseguir resultados o beneficio a partir de una elección correcta, el segundo, las oportunidades para obtener dicho resultado, esto en un contexto de competencia. Las regiones deben jugar un papel activo en su desarrollo de lo contrario, se confinan a un pobre desempeño. **“Una solución de política regional puede estar basada en un arreglo de incentivos. Por ejemplo, garantizar mínimos o máximos sociales, premiar o castigar las estrategias que se desvían de la socialmente deseada”.**

De acuerdo con el escenario anterior, los puntos que convergen al análisis establecen diferentes niveles de decisión que reflejan las necesidades de cada región por separado, no obstante, se constituyen en un mismo marco circunstancial: el desarrollo económico.

2. Autonomía territorial

En concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional C-189/19: **“El alcance del principio de autonomía de las entidades territoriales se determina, constitucionalmente, por el influjo de dos elementos complementarios: el principio de Estado Unitario y las competencias constitucionales propias de las entidades territoriales, en virtud de su autonomía. El principio de Estado Unitario determina que todos los órganos del Estado, comprendidos todos los niveles de la administración pública, incluida la territorial, hacen parte de la unidad política del Estado, lo que implica que las potestades derivadas de la soberanía, tales como la política macroeconómica, el acño de la moneda, el manejo de las relaciones internacionales, el ejercicio de la función jurisdiccional y de la función legislativa e, incluso el mantenimiento del orden público, son asuntos que pertenecen al Estado, en su conjunto, razón por la cual, las entidades territoriales carecen de competencias en estas materias y, por lo tanto, su autonomía no es absoluta, sino se encuentra subordinada al ejercicio de estas potestades estatales. (negritas fuera de texto).**

La autonomía territorial como principio permite que los gobiernos locales tomen decisiones basados en la mejor selección de elementos que deriven de un mayor bienestar para la comunidad, en este orden de ideas, ser libres para elegir su propio nivel de desarrollo y participación democrática caracteriza el ejercicio de gobierno autónomo siempre y cuando sea dentro de la frontera de posibilidades, entendidas como los límites constitucionales respecto de la capacidad del Estado para dirigir el destino macroeconómico nacional.

Por ende, que la política económica regional parte de la base de autonomía y libertad implica a su vez que se construye a través de las diferencias regionales que requieren en distinta proporción solución a necesidades similares pero con impacto diferente pues como es natural, cada definición regional de desarrollo es diferente en cuanto a su forma y propósito de acuerdo con la composición social y económica presente en su geografía, de ahí que los planes departamentales y municipales de desarrollo no converjan a una combinación eficiente de decisiones constituidas desde el cuerpo normativo que obedece a sus necesidades inherentes.

Ahora bien, las regiones a partir de su autonomía tienen la obligación de generar dinámicas económicas que contribuyan a su bienestar aún cuando las condiciones de financiamiento y gasto se decidan desde el nivel central, no obstante, se trae a discusión la hipótesis por medio de la cual las regiones con mayor capacidad de generación de valor agregado a la economía tendrán mejores condiciones de financiamiento, esto demuestra el origen del incentivo hacia mejores posibilidades de recursos por parte del nivel central a aquellos cuyos resultados son sustancialmente mejores. De ahí que la competencia regional sea clara al establecer tales eficiencias marginales.

Aunque la autonomía como principio no es elemento constitutivo de la capacidad intrínseca regional para reglar su propio desarrollo, es evidente que el legislativo ha otorgado por medio de la constitución herramientas de mejora a través de un conjunto de políticas públicas, para afianzar la descentralización y, con ella permitir que bajo el modelo democrático y a su vez centralista que confluye entre el ejecutivo y los gobiernos subnacionales el grado de libertad para el bienestar social.

Según lo desarrollado por la sentencia **C-1258/01**: **“La autonomía como principio constitucional representa un rango variable, que cuenta con límites mínimos y máximos fijados por la constitución política, dentro de los cuales actúan los entes territoriales. El legislador está autorizado para fijar los alcances de la autonomía territorial, dentro de los límites mínimos y máximos que señala la Constitución -en un extremo, el núcleo esencial, y en el otro, el límite dado por el carácter unitario del Estado-, los cuales no podrá sobrepasar. Entre estos dos límites el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, se desplaza para fijar el grado de autonomía en cada materia o asunto a cargo de las entidades territoriales”**

Una primera aproximación en este proyecto de ley se deriva del estudio de la literatura disponible en torno a desarrollo regional, por lo tanto, se aclara que en términos de desarrollo, la vasta producción intelectual ha reflexionado sobre el punto de partida de **Necesidades, Carencias, limitaciones, barreras, escasez, presiones**, para referirse al conjunto de elementos que hacen parte de la explicación de diferencias interregionales, abarcando los procesos políticos y democráticos que surgen cada vez que se eligen mandatarios locales y nacionales, aunque no se abarca el análisis histórico a nivel holístico si se profundiza en que en la actualidad el discurso ha superado con creces los resultados en materia de

desarrollo regional, esto en primer lugar por las difíciles condiciones de financiamiento y gasto administrativo creciente, ineficiencias fiscales, sobre costos en la contratación y por supuesto, diferentes niveles de corrupción dado el tamaño del presupuesto asignado.

A su vez, los elementos normativos no son abordados a plenitud, generando mayores costos de transacción respecto a la eficiencia de administración local, ahora bien, también coexiste con esta realidad un comportamiento subjetivo que se basa en el discurso más que en el dato y aunque logra captar la complejidad del territorio, no determina objetivos realizables, de ahí que cada que se elige un gobierno local, se vuelvan sistemáticos los errores del pasado.

Entendiendo que las regiones deben jalonar sus propios procesos de desarrollo y crecimiento económico, es loable que su dependencia al nivel central, al ser la república unitaria conforme lo establece la Constitución Política, varíe en distintos niveles respecto de la gestión de recursos, proyectos y ayudas Estatales que requieren para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio, no obstante la distribución de los recursos es desigual y mucho mas la administración de los mismos, a pesar que a nivel institucional el Estado ha evolucionado respecto de la forma de asesorar el desarrollo a nivel nacional.

Así mismo la literatura ha planteado el estudio del desarrollo a través de una limitada visión del territorio pues se analiza desde el punto de vista fiscal, dejando por fuera el espacial, con lo cual existe una tendencia a desconocer el componente geográfico y en su lugar a sobrevalorar los modelos de equilibrio que en gran parte difieren de la realidad del territorio, según, (Gonzalez, 2004) en Colombia la descentralización ha girado en torno a los aspectos fiscales. Se han dejado de lado otras dimensiones del proceso como la descentralización espacial. La descentralización fiscal ha llegado a un momento crítico. Se está agotando y por ello es necesario avanzar hacia la descentralización espacial.

(Gonzalez, 2004) cita a Krugman sobre la crítica que este último hace sobre las ventajas comparativas pues son pasivas en cuanto la tesis que las aloja, ya que en teoría de comercio internacional, cada país se debe especializar en la producción de aquellos bienes que de acuerdo con la dotación inicial de recursos le permiten competir, no obstante, Krugman argumenta que las ventajas comparativas se pueden generar mediante políticas activas y la especialización puede ser inducida, creando condiciones favorables a los rendimientos constantes a escala y dinámicas endógenas que no son compatibles con la lógica del equilibrio, concluye que la lógica del mercado ha llevado a desconocer la importancia de las políticas discrecionales para incentivar la competitividad del país en determinadas actividades económicas.

Es comprensible que tanto el Estado como los gobiernos locales acudan a políticas discrecionales que les permita obtener resultados y alcanzar objetivos loables, siempre que bajo el principio constitucional de Estado de Derecho funcionen en

armonía con la legislación vigente, es previsible que a nivel de los entes territoriales se ejerzan diferentes acciones para llegar a un bien común lo cual necesita del nivel central para ser realizable, sin embargo los gobiernos locales están en la obligación de generar sus propias políticas cumpliendo los límites que les ha otorgado la legislación colombiana.

Sobre la tesis que las políticas deben ser hasta cierto grado discrecionales, en la práctica se ha observado que muchas se derivan de la condición general del plan nacional de desarrollo que ha funcionado como hoja de ruta para la planificación del territorio en materia de política pública, a su vez, la ley 152 de 1994 orgánica del plan de desarrollo, en su artículo 32 establece **"Las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley"** negrilla fuera de texto.

Así las cosas, el principio de autonomía se cumplen siempre y cuando este dentro de los límites que la legislación ha dado y siempre que las políticas sean conducentes a niveles de desarrollo, bienestar o calidad de vida mejores en el tiempo, naturalmente se supedita a la intervención del Estado por cuanto la República se caracteriza por ser unitaria y por consiguiente reglada por normas y políticas generales que hacen parte de las decisiones de los gobiernos locales con la orientación y auspicio del Estado. Por otro lado, pensar el desarrollo regional a partir de presiones fiscales, desconociendo el análisis espacial y las dinámicas poblacionales puede conducir a errores que limitan la visión de las decisiones de bienestar a largo plazo, pues el desarrollo implica tener claros los momentos, el espacio, la dinámica económica y la concurrencia de la sociedad en un marco regulatorio definido.

Finalmente, no se puede desconocer que la autonomía territorial representa la libertad de elegir para los gobiernos subnacionales en el entendido que pueden tomar las decisiones de política para el bienestar de sus territorios de acuerdo con la directriz institucional de nivel central de forma que se converja al ordenamiento constitucional de participación en una república unitaria sin perjuicio sobre la autonomía plena de las regiones y su forma de consolidar el desarrollo.

3. Competitividad Regional

El reto más grande que enfrentan las regiones es el de ser competitivas al tiempo que luchan contra las brechas de ingreso y las dificultades para el desarrollo humano inmersas en sus territorios, a lo que se suman, factores como el conflicto armado, violencia, narcotráfico, informalidad, entre otros que se caracterizan por profundizar las desigualdades e inequidades al interior.

Sin embargo, también se enfrentan a diferencias de dotación de recursos naturales que las caracterizan y que tienen impacto en la composición socioeconómica y cultural definida por una amalgama de elementos constitutivos de su territorio, lo que a su vez impacta dinámicas económicas en distintas proporciones y sentidos sobre la cobertura de bienes públicos, la tasa de desempleo, pobreza, localización empresarial y en general el clima económico que define su éxito o fracaso. No debe pasar desapercibida la composición demográfica que afecta las relaciones de intercambio, participación y consolidación de un modelo económico que responde a los diseños institucionales del orden nacional.

De acuerdo con (Díaz, Álvarez, & Ojeda, 2020) Especificando el concepto de competitividad regional, podemos decir que la misma está relacionada con aquellas teorías que intentan comprender y determinar los medios por los cuales el desarrollo económico ocurre en las regiones. De acuerdo con el estudio de la teoría, varios autores se refieren a los elementos que a nivel macroeconómico dan forma al concepto de competitividad, en este orden de ideas:

- a) Desempeño económico exitoso evaluado en términos de aumento de los ingresos reales y el nivel de vida
- b) Condiciones de mercado abierto y transparente para los bienes y servicios producidos por la nación.
- c) La competitividad a corto plazo no debe producir desequilibrios que la vuelvan insostenible a largo plazo.

Así las cosas, a nivel regional las tres condiciones: bienes públicos, mercado y sostenibilidad necesitan de coordinación para poder establecer un modelo administrativo que permita estimular el desarrollo regional, no obstante para alcanzarlo mediante el impulso a la competitividad los gobiernos locales deben apoyarse en alternativas de política económica que impulse sus territorios, para ello pueden valerse de la legislación vigente, los desarrollos institucionales ofertados, la elaboración de programas de desarrollo consistentes y metodológicamente viables entre otras opciones como disponibilidad de información para construir modelos de prospectiva sobre los objetivos trazados de mediano y largo plazo.

Los modelos de competitividad regional suelen estar implícitamente contruidos bajo el marco del crecimiento endógeno, por lo que las inversiones deliberadas en factores como el capital humano y el conocimiento se consideran factores clave de las diferencias de crecimiento (Díaz, Álvarez, & Ojeda, 2020).

Para redondear, la competitividad a nivel teórico proviene de varias teorías: desde Schumpeter que la considera un proceso inmerso en emprendimiento, conocimiento e innovación, hasta la teoría de juegos que analiza las dinámicas de competitividad desde las estrategias que desarrollan las regiones para proporcionar las mejores condiciones para que las empresas operen, también ha tomado una fuerte relevancia la geografía económica como un conjunto de factores internos y externos que afectan el territorio. Actualmente, los índices compuestos para la medición de

la competitividad han evolucionado a niveles que destacan dimensiones en diferentes aspectos y escalas y los sintetizan a través de pilares e indicadores relevantes:

Para (CEPAL, 2021) América Latina tiene varias mediciones de la competitividad regional, sintetizadas en la siguiente tabla:

Tabla 1. Diferentes mediciones de la competitividad a nivel regional en países de AL.

México	<ul style="list-style-type: none"> * Índice de Competitividad Estatal (IMCO) * ÍNDICE DE Competitividad Urbana 	32 ET + 363 municipios en 73 aglomeraciones	Subíndices: *Derecho *Medio ambiente *Inclusión social *Mdo factores *Estabilidad económica *Competitividad *Relaciones *Internacionales *Innovación	Escala 0-100
Argentina	<ul style="list-style-type: none"> *Índice de desarrollo sostenible provincial (IDSP) *Índice de competitividad provincial *Índice de competitividad de las economías regionales (ICER) 	40 provincias	Dimensiones: • Crecimiento • Inclusión social • Sostenibilidad ambiental Dimensiones: • Infraestructura • R. naturales • Población • Macroeconómico • Desempeño económico • Sector externo • Calidad	0-1
Chile	<ul style="list-style-type: none"> Índice de desarrollo regional (IDERE) Índice de competitividad comunal de la región del Maule 	32 indicadores	Indicador de competitividad subregional que mide	0-1

		subregiones en 6 factores (economía, infraestructura, gestión comunal, personas innovación, medio ambiente)	<ul style="list-style-type: none"> Seguridad sustentabilidad 	
Perú	Índice de competitividad regional	40 indicadores en 6 dimensiones para estudiar 25 regiones.	Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> entorno económico infraestructura salud educación Mdo laboral institucionalidad 	0-10
Colombia	Escalafón de competitividad de los Departamentos	(infraestructura y logística, fortaleza económica, conectividad estratégica, bienestar social y capital humano, derechos, innovación, instituciones)		
	Índice Departamental de Competitividad	32 departamentos y Bogotá + 108 indicadores	Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> Condiciones habilitantes Capital Humano Eficiencia de los Mercados Ecosistema Innovador 	1-10
	Índice subnacional de emprendimiento			

Fuente: Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia, 2019.

Colombia ha venido desarrollando un conjunto de iniciativas de política pública basadas en indicadores que cubren diferentes niveles de desarrollo social, brechas y diferencias a nivel intrarregional que le ha permitido evolucionar en cuanto a la medición propia del desarrollo, es de resaltar que sobre el indicador de crecimiento económico y pobreza monetaria han surgido los debates en torno a las desigualdades a nivel nacional, lo que ha llevado a elaborar conjuntos de políticas diferenciadas, sin embargo no llegan a la misma velocidad a los territorios y se pierden entre múltiples decisiones a nivel local que infravaloran muchas veces los esfuerzos desde el nivel central por mejorar las condiciones socioeconómicas, a su

vez centros de investigación económica, instituciones dedicadas a la competitividad nacional y los gremios productivos han propuesto un sinnúmero de soluciones a través de información consolidada de calidad que disponen a la sociedad civil para tomar mejores decisiones e interpretar las realidades sociales y económicas de forma objetiva.

Al observar la medición de la competitividad, se encuentran diferentes grados de concentración en la valoración del índice que provienen de información parcial desde las regiones, por lo tanto, construir índices con base en la información regional se caracteriza por un alto grado de complejidad en la construcción de conjuntos de información confiables, organizados y diferenciados. En otras palabras, medir la competitividad no se trata de la aplicación de un solo índice sino de varios que cobran importancia en cada una de las dimensiones que concierne a su estructura. Así que, esto nos lleva a identificar vacíos en la política pública pues a nivel territorial o local, la cuantificación del impacto de las decisiones se hace a partir de valores subjetivos con información imprecisa en muchas ocasiones lo cual no garantiza el impacto de sus decisiones.

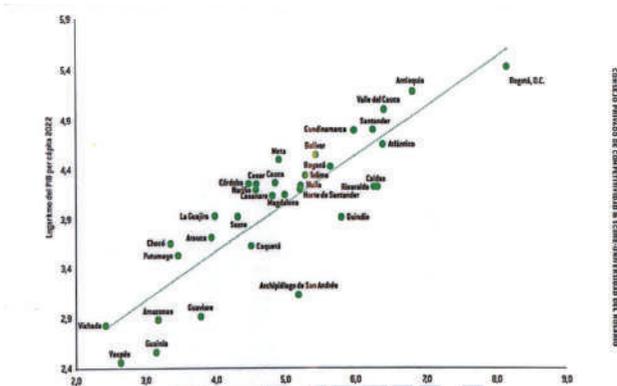
A continuación, se refleja en análisis de competitividad para Colombia a partir del informe departamental de competitividad elaborado y presentado por el Consejo Privado de Competitividad.

medición incluye 108 indicadores, conformados a partir de datos duros, no de percepción. Por lo tanto, constituye una herramienta que ilustra de manera objetiva la gestión de los gobiernos regionales salientes, y ofrece una línea base para las administraciones locales entrantes el próximo año

De acuerdo con los resultados del IDC para 2024, uno de los indicadores que refleja la competitividad a nivel departamental es el crecimiento económico, de esta manera, presenta la correlación entre el crecimiento y los puntajes del IDC a partir de los cuales según el CPC el PIB de los departamentos que encabezan el ranking de competitividad supera por hasta 4 veces aquellos que no tienen un PIB alto. En cuanto a la asociación del índice con la pobreza y la calidad de vida, refleja cómo los departamentos más competitivos tienden a tener menores tasas de pobreza multidimensional.

Gráfico 8. Correlaciones entre el IDC e indicadores proxy de bienestar en los departamentos

2) IDC 2024 y logaritmo del PIB per cápita departamental 2022

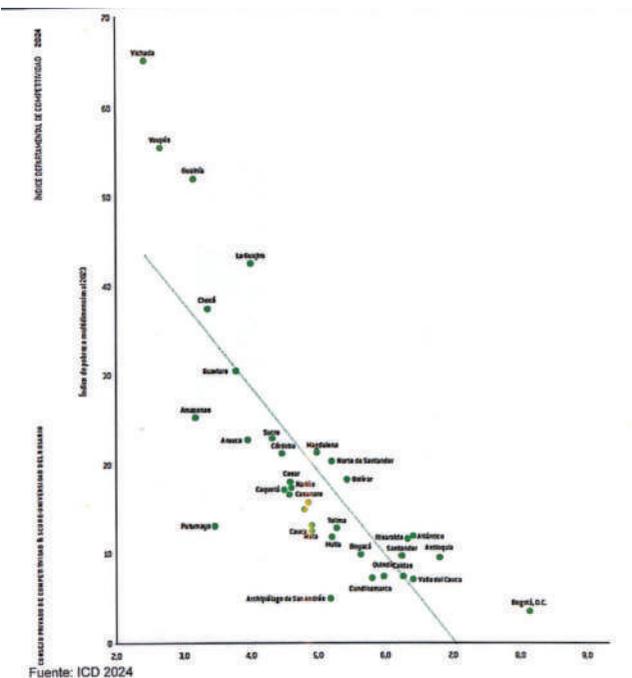


Fuente: IDC 2024.

Tal como se observa en los gráficos 8 y 9, las condiciones de la economía a nivel departamental explican las brechas o diferencias entre la correlación del índice de competitividad y los niveles de bienestar o desarrollo a nivel endógeno, por lo tanto, departamentos con mejores indicadores de competitividad, presentan mayores niveles de bienestar y esto no solo se observa desde el punto de vista comparado de su economía sino a través de las instituciones que ejercen su función administrativa, en este orden de ideas por ejemplo, siguiendo con lo establecido por el consejo privado de competitividad, los 4 factores sobre los cuales proceden 108 indicadores se definen como: *Condiciones habilitantes* (instituciones, infraestructura, adopción TIC, sostenibilidad ambiental), *Capital Humano* (salud, educación básica y media, edu. Superior y formación para el trabajo), *eficiencia de los mercados* (entorno para negocios, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado), *ecosistema innovador* (sostitución y diversificación, innovación).

Amazonas, Guainía, Vaupés, de acuerdo con el gráfico 8, son los departamentos con menor índice de competitividad junto con un menor PIB nacional, a su vez, en términos de pobreza multidimensional, Guainía y Vaupés mantienen un indicador superior al 50% junto con Guajira, mientras que Amazonas se ubica en una mejor posición. Sin embargo, la mayoría de los departamentos se ubican en un entorno de baja competitividad, alta tasa de pobreza monetaria y bajos niveles de crecimiento económico.

Gráfico 9. B) IDC 2024 e índice de pobreza multidimensional 2023

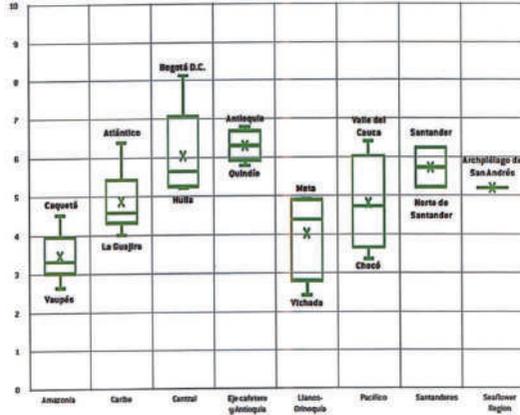


Fuente: IDC 2024

A nivel regional la competitividad no es bien desarrollada principalmente porque no hay condiciones para alcanzarla, por ejemplo, en materia productiva los mercados se encuentran desanclados de la actividad agregada pues no se lleva un registro u ordenación sistemática que permita medir su comportamiento a nivel endógeno, información que es tratada por algunos centros de pensamiento o instituciones que procuran evidenciar el grado de desarrollo de las economías regionales a nivel nacional, en este caso podemos encontrar los informes producidos por el Banco de la República, como el boletín económico regional (VER) junto a sus documentos de borradores de economía, así mismo la academia, centros de investigación y

organizaciones sin ánimo de lucro han avanzado en la publicación de teoría sobre el desarrollo regional y competitividad, lo han hecho desde las condiciones estadísticas hasta el análisis espacial que muestra con mayor grado de precisión las diferencias inter-regionales; de esta forma se llegan a puntos de convergencia en el cual, las dinámicas del territorio dependen de la dinámica a nivel nacional pero a su vez derivan sus problemáticas de las decisiones que toman su administración en cabeza de su máximo representante de gobierno local.

Gráfico 10. Brecha en Competitividad entre regiones.



Fuente: IDC 2024

En el gráfico 10, tomando los datos del IDC para 2024, se observan las brechas de competitividad entre regiones, comprando las ciudades o municipios de una misma región con mejor y peor resultado, así, conforme a las estimaciones del CPC, se tiene que la región eje cafetero y Antioquia tienen la menor brecha a nivel nacional, mientras que las regiones, llanos – Orinoquia y pacífico presentan una categoría de mayor brecha regional.

Sin embargo, es conocido que, a nivel local, tanto departamentos como municipios están supeditados a información asimétrica de la cual derivan las decisiones de política pública, desconociendo en la mayoría de los casos el impacto que genera sobre la población, así, por ejemplo, los mayores hitos en materia de desarrollo local se reúnen en 3 factores: 1. Infraestructura para el desarrollo, 2. Vivienda y

condiciones dignas de vida, agua potable y saneamiento básico; sin embargo, la planificación del desarrollo muchas veces se queda corta en cuanto al alcance de estos 3 factores junto con la provisión de bienes públicos por citar un ejemplo.

A nivel competitivo no se cumplen los objetivos en los tiempos previstos y en contraposición se suman cada vez un sinnúmero de iniciativas que impactan negativamente el gasto por un incremento en la meta trazada y generan distorsiones de tipo administrativo que no se enfocan en lo que realmente podría llegar a ser un verdadero plan para el desarrollo municipal y departamental, lo que a su vez impide la visión de largo plazo del territorio.

4. LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL

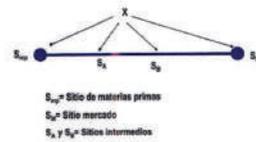
La materia sobre la que trata este proyecto de ley parte de la articulación entre la concepción de competitividad para llegar al desarrollo económico a través de la identificación de factores que dinamicen la economía de sus territorios, en este sentido, la localización empresarial hace parte del conjunto productivo que puede generar desarrollo endógeno bajo condiciones de competitividad, ventajas comparativas y sobre todo conexión y bajos costos de operación siempre que exista un escenario viable para su operación.

La localización empresarial se explica como un proceso por medio del cual un productor o empresario decide ubicar su unidad productiva debido a la facilidad con que puede llevar a cabo negocios. En este sentido elige aquel lugar donde las condiciones institucionales garantizan un ecosistema seguro para su desarrollo en un entorno de negocios. Así mismo tienen capital humano, cercanía e interconexión con otros mercados lo que les permite desarrollar su actividad.

Modelos de localización como el Alfred Weber, establece un interés intrínseco en la distancia comprendida entre los puntos de encuentro con la materia prima, el mercado y aquellos sitios intermedios útiles para el desarrollo de la actividad productiva, persigue un fin particular: la minimización de los costos de transporte a nivel del espacio de localización.

Gráfico 8. Mercados puntiformes (weber)

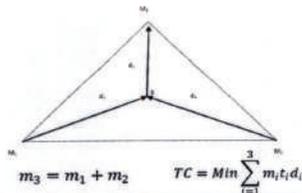
a)



Fuente: Quintana, Romero.

En cuanto a la localización que permite el mínimo costo de transporte entre el sitio de producción, el mercado de insumos y el mercado de bienes finales, se compara con aquellas ventajas de aglomeración que le permitan mayor beneficio aun cuando tenga que incurrir en una nueva localización con un costo adicional. La empresa es atraída por cada sitio de acuerdo al impacto que tenga en la maximización de su beneficio su eventual relocalización (asud norman 2014).

b)



Fuente: Quintana, Romero.

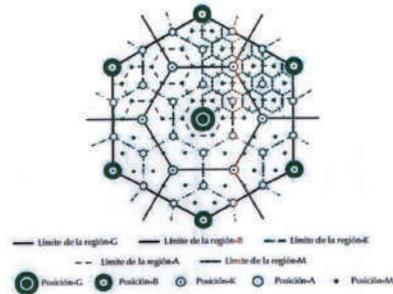
Otra de las teorías de localización más importante, proviene del modelo de Christaller, denominado teoría de los lugares centrales, explica la formación de rentabilidades en una ubicación espacial donde dada la jerarquización de los espacios urbanos, se prestan diferentes servicios para la población. Según (Becerra, Valbuena, 2013) se dio paso a la idea de las configuraciones económicas y espaciales del entorno, específicamente de lugares concéntricos de tipo jerárquico entre las ciudades. Este análisis ha sido llamado la Teoría de los Lugares Centrales (TLC).

La localización es una de las variables que mas importancia tiene a la hora de establecer unidades productivas en un mercado que ofrece posibilidades para crecer, perfeccionarse, crecer o mejorar a nivel macro, lo que permite determinar el éxito de una ciudad, un territorio o diferenciar toda una región por el tamaño no solo geográfico sino por el grado de aceleración de su economía, diversificación, capital humano, materias primas entre otras ventajas que ofrece a nivel concéntrico, de ahí que sea tan importante el desarrollo de actividades económicas de base en cualquier de los sectores económicos que mejor se presente en las economías.

En términos comparativos, a nivel regional el país muestra una alta capacidad de diversificación productiva, sin embargo, no se establecen núcleos empresariales fuertes que permitan la especialización de los territorios, esto se ve por una alta dispersión de industrias localizadas a lo largo de la geografía a nivel de ciudades.

Gráfico 9 principio general de la teoría de localización de Christaller.

Sistema de lugares centrales con diferentes niveles de jerarquías



Fuente: Becerra Valbuena 2013.

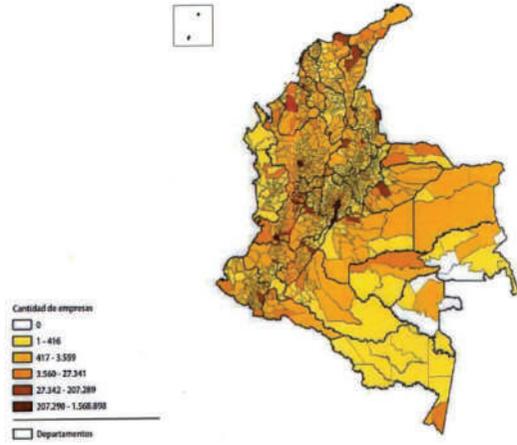
La localización de las empresas es una componente fundamental de la competitividad de estas. Pero los costos de transporte no son ni el único, ni el principal elemento que condiciona la localización. La disponibilidad de factores específicos de contexto explica mucho de la localización empresarial. Los principales factores son la disponibilidad de mano de obra en cantidad y calidad suficiente, la existencia de proveedores y demanda local, infraestructura y servicios presentes y el acceso a aquellos ambientes sociales dinámicos propensos a la actividad emprendedora. (DANE 2019)

De acuerdo con el estudio presentado por el DANE en el atlas de geografía industrial de Colombia, los elementos que explican la dinámica de la concentración territorial de la actividad industrial son dos (2) a saber:

- En función de la necesidad de minimizar costos en presencia incluso de localización de otras empresas.
- Cuando la empresa decide asentarse donde otras ya lo han hecho (se cumplen los postulados de weber y de Christaller)

En el análisis de las fuerzas económicas que explican la localización y la concentración de la industria, es importante diferenciar entre las economías de escala "internas" a la empresa y economías externas" a la misma. Ahora bien, respecto a la localización comparada, en términos del uso de la teoría de Christaller aplicada a Colombia podemos encontrar que hay tres niveles: 1. Jerarquía Urbana, 2. Factores geográficos y económicos y 3, desafíos y adaptaciones.

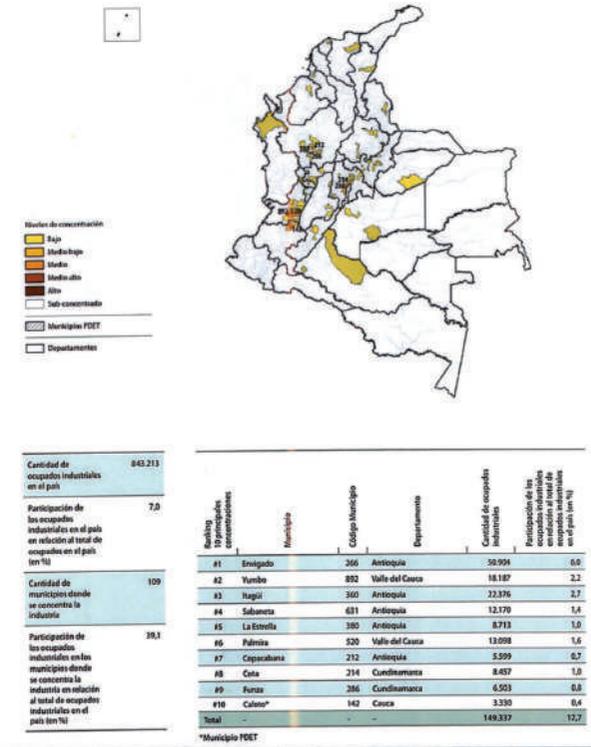
Gráfico 10. Cantidad de empresas y ocupados totales por municipio



Fuente: Dane

Andes, pacífico y Caribe con las regiones que acogen a la gran mayoría de empresas, Bogotá por excelencia es el único ente territorial de carácter especial que reúne empresas con una ocupación total superior a 1.6 millones de trabajadores, junto con Medellín y Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Montería y Barranquilla son ciudades importantes por ocupación, mientras que la gran mayoría están entre niveles de localización empresarial con ocupación de 1.000 a 3.500 trabajadores de acuerdo con el gráfico 10. La región Orinoquía ha tomado relevancia, mientras que el pacífico es dinamizada en mayor proporción por el valle del cauca, el Meta en Orinoquía es otro de los departamentos donde la localización de empresas tiene un peso significativo, por otro lado, e Tolima, Ibagué es la ciudad que muestra dinámica empresarial. Grosso modo, las ciudades capitales tienen este potencial, sin embargo, departamentos como Boyacá tienen una mayor dispersión y la mayoría de ocupados oscila en un conjunto empresarial entre 1 y 400 empleados (ocupados por empresa. A nivel industrial 109 municipios concentran el 100% de la industria.

Gráfico 11. Concentración Industrial por Municipio.



Fuente: Dane

El municipio de Envigado en el Departamento de Antioquia tiene la mayor concentración de empresas a nivel nacional, con 32. 829 empresas y 1.327 empresas industriales, con una ocupación de 120.395 trabajadores y 50.904 ocupados industriales, la medición se hace de acuerdo con la participación de los ocupados industriales en el país con respecto al total de ocupados en el país (%), localizando el ranking de los 20 municipios con mayor participación en la industria así:

Tabla 2. Concentración industrial por municipios 2019.

Municipio	Población	Cantidad de empresas	Cantidad de empresas industriales	Cantidad de ocupados	Ocupados industriales	Nivel industrialización (%)
Envigado	227.644	32.829	1.327	120.395	50.904	42,3
Yumbo	119.932	9.947	700	60.691	18.187	30,0
Itagüí	270.903	25.027	2.125	102.366	22.376	21,9
Sabaneta	52.554	9.786	536	42.952	12.170	28,3
La estrella	63.335	4.993	467	26.009	8.713	33,5
Palmira	306.706	30.371	1.353	68.608	13.098	19,1
Copacabana	71.035	5.152	319	14.573	5.599	38,4
Cota	25.432	6.104	317	41.755	8.457	20,3
Funza	76.742	9.067	530	26.159	6.503	24,9
Caloto (PDET)	17.680	798	39	4.821	3.330	69,1
Cajicá	58.036	10.566	435	22.013	5.770	26,2
Dosquebradas	200.832	20.495	1.247	43.677	7.807	17,9
Girardota	55.490	3.041	139	9.364	3.643	38,9
Candelaria	82.908	4.525	296	12.028	3.781	31,4
Mosquera	84.841	10.493	659	27.954	5.316	19,0
Sibaté	39.117	2.266	113	6.068	2.731	45,0
Soacha	522.442	39.019	2.530	58.307	7.617	13,1
Tocancipá	32.821	3.854	209	20.135	4.200	20,9
S. Quilichao	95.041	7.324	308	12.880	3.291	25,6
Tenjo	19.963	2.842	124	10.848	2.779	25,6

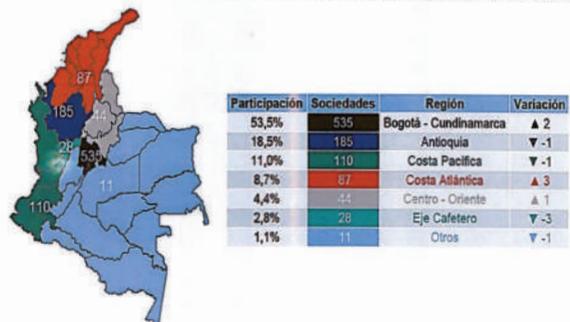
Fuente: Dane. Atlas industrial (2019)

*** los cálculos de población se presentaron en el estudio con corte a 2019, lo cual puede diferir de las proyecciones de población del Dane para 2022, con base en el censo de 2018. Se afectan algunas poblaciones de municipios de Cundinamarca como Cota, Tocancipá, Cajicá.

A nivel municipal la localización de empresas representa una alta probabilidad de crecimiento económico a lo largo de los años, además de un aumento de la mano de obra que migra hacia estas localizaciones, capital humano que se forma alrededor de las dinámicas económicas, transporte que se desarrolla en torno a la logística y los costos, vivienda que se establece cerca a los núcleos laborales y en los casos más avanzados, conurbaciones gracias a la expansión de una región que contiene

varias de las actividades empresariales e industriales. Llama la atención que Antioquia sea el Departamento con mayor número de municipios con alguna localización industrial, seguido de valle y Cundinamarca. Sin embargo, al revisar los datos por localización de empresas de gran tamaño con niveles de utilidades importantes y con una alta proporción de activos, Bogotá y Cundinamarca son por excelencia las locaciones de estas unidades productivas, de acuerdo con el gráfico 12, con una participación del 53,5% se localizan las grandes empresas en esta región, seguido de Antioquia (18,5%) la Costa Pacífica (11,0%) y la costa Atlántica (8,7%), en total poseen un nivel de localización del 91,7% de las empresas de alto valor.

Gráfico 12. Distribución de las 1000 sociedades más grandes por región 2022

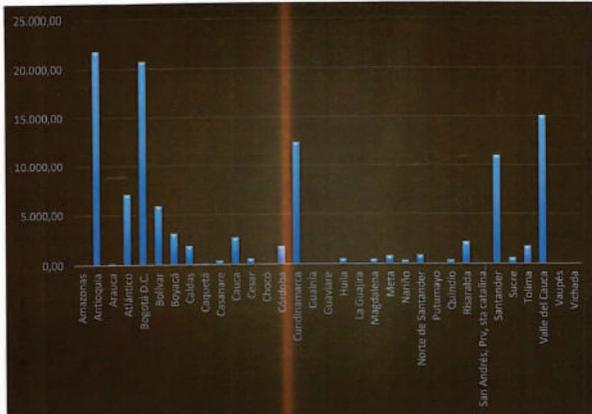


Fuente: SuperSociedades

La realidad de las regiones en Colombia tiende a catalogarse como aquellas céntricas que atraen la mayor parte de empresas grandes porque tienen las condiciones de infraestructura, servicios y capital humano aptas para su desarrollo, aquellas ciudades intermedias que proveen algunas condiciones y suplen otras como la logística por estar cerca de ciudades más grandes y aquellas ciudades y municipios distantes que no ofrecen muchas condiciones favorables para la localización de empresas pero si tienen potencial que no desarrollan y que originarían cambios sustanciales en su base productiva.

A pesar de los esfuerzos por buscar la descentralización y el desarrollo de regiones autónomas, las condiciones aun se encuentran desarticuladas de los niveles de administración y desarrollo de un ecosistema empresarial consolidado, principalmente porque los esfuerzos de política pública se desdibujan en los planes de desarrollo territorial y municipal.

Gráfico 13. PIB departamental por actividad económica – industria manufacturera 2023. (\$MM)



Fuente: Construcción propia a partir de Dane.

Comparando la actividad económica por ramas a nivel departamental, se observa que la manufactura tiene un impacto significativo del PIB en Antioquia (\$21,7 billones), Bogotá (\$20.7 billones), Valle del Cauca (15.08 billones), Cundinamarca (\$12,3 billones) y Santander (\$10.9 billones), estos 5 departamentos hacen parte de los que mas han desarrollado la localización de esta industria en sus territorios. A nivel general se tiene que 12 de los 32 departamentos, incluyendo a san Andrés, Providencia y santa Catalina, deriva una buena parte de su ingreso de esta actividad.

A nivel agregado, la participación de los departamentos en el PIB nacional se refleja en mayor proporción en Bogotá (25%) y Antioquia con el (14,7%) si a eso se suman los valores de Cundinamarca (6,3%), Santander (6,4%) y valle del cauca (9,7%) estos cuatro departamentos aportan el 63,1% del PIB nacional, en menor medida aquellos que se encuentran por debajo de 0.1% y 2% que completan la geografía colombiana. Sin embargo, la naturaleza de la producción y el comercio se localiza en zonas geográficas que han especializado al menos una de sus categorías económicas, sin embargo, la talanquera de la economía colombiana se ve en una

sobre centralización de la economía respecto de una baja diversificación, esto ha llevado a que los departamentos mas pequeños o de menores ingresos no sean aprovechados por sus ventajas comparativas, por ejemplo.

Tabla 3. Tasa de participación (%) Departamental en el PIB nacional 2023*

Amazonas	0,1
Antioquia	14,7
Arauca	0,5
Atlántico	4,5
Bogotá D. C.	25,0
Bolívar	3,6
Boyacá	2,7
Caldas	1,7
Caquetá	0,4
Casanare	1,4
Cauca	1,8
Cesar	2,1
Chocó	0,4
Córdoba	1,8
Cundinamarca	6,3
Guainía	0,0
Guaviare	0,1
Huila	1,7
La Guajira	1,2
Magdalena	1,4
Meta	3,4
Nariño	1,5
Norte de Santander	1,6
Putumayo	0,4
Quindío	0,8
Risaralda	1,7
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago)	0,1
Santander	6,4
Sucre	0,8
Tolima	2,1
Valle del Cauca	9,7
Vaupés	0,0
Vichada	0,1

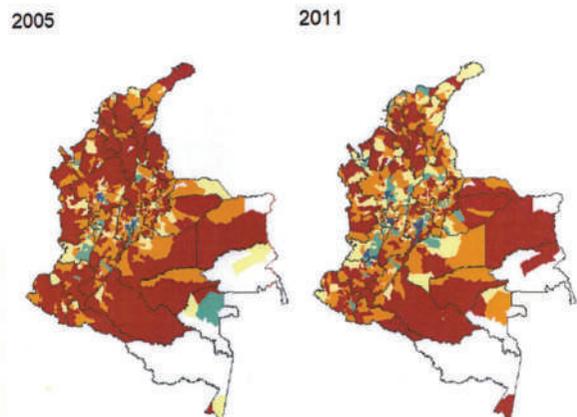
Fuente: DANE. (los valores son proyectados de acuerdo con la presentación de las cifras del PIB departamental)

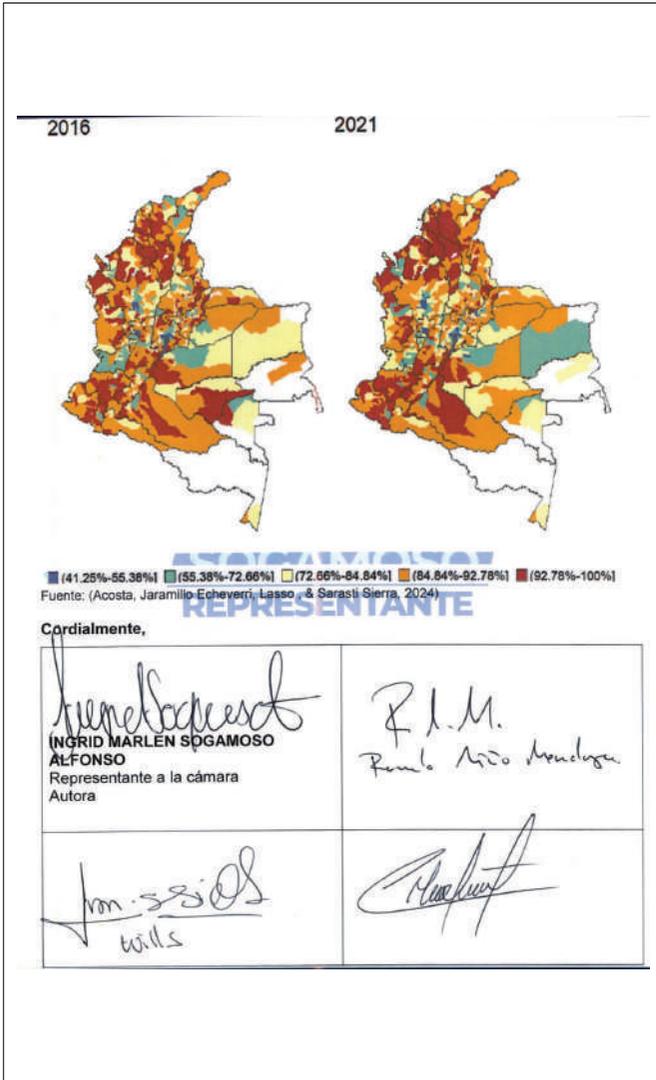
Finalmente, se introduce en este análisis los resultados del estudio presentado por (Acosta, Jaramillo Echeverri, Lasso , & Sarasti Sierra, 2024) en cuanto a la informalidad municipal para los años 2005, 2011, 2016 y 2021 mediante un modelo (SAE) estimación de área pequeña, en el cual se establece la complejidad de analizar la información de informalidad a nivel municipal dado que la GEIH como principal fuente de consulta contiene los mejores datos pero al consultar el nivel municipal más disperso, la información es asimétrica, no obstante el estudio mostró el cambio de la informalidad para los años de estudios con una importante observación: (se cita original de texto).

"Los resultados revelan patrones regionales importantes, con unas tasas de informalidad que varían entre el 25% y el 97 %, y donde la mayor parte de los municipios han mantenido tasas de informalidad superiores al 50% desde 2005. Sin embargo, los resultados también evidenciaron una reducción entre 2005 y 2021 en las tasas de informalidad para casi todos los municipios, aunque esta reducción estuvo altamente concentrada geográficamente. Los departamentos mayoritariamente Caribes y Pacíficos concentran las tasas de informalidad más altas del país" [...]

INGRID SOGAMOSO REPRESENTANTE

Gráfico 14. Informalidad laboral municipal, 2005, 2011, 2016 y 2021





Julio Roberto Salazar P.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 23 de agosto del año 2024
Ha sido presentado en este despacho el
Proyecto de Ley 246 Acto Legislativo _____
No. _____ Con su correspondiente
Exposición de Motivos, suscrito Por: H.A. Ingrid Sogamoso

SECRETARIO GENERAL

CONTENIDO

Gaceta número 1285 - lunes, 9 de septiembre de 2024

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY Págs.

Proyecto de ley número 238 de 2024 Cámara, por medio del cual se crea la Política de Austeridad Pública, se establece la obligatoriedad de los Planes de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y se definen lineamientos para promover y priorizar la transparencia del gasto público. 1

Proyecto de ley número 246 de 2024 Cámara, por medio del cual se impulsa la política de localización empresarial para el desarrollo regional y se dictan otras disposiciones..... 16